

**UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS**



**“INAPLICANCIA DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN  
LOS DELITOS COMETIDOS EN LAS ZONAS ANDINAS”**

**TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE  
ABOGADO**

**TESISTA : Bach. Lucy Marysol Soto Peralta**

**ASESOR : Dr. Felix Ponce e Ingunza**

**HUÁNUCO – PERÚ**  
**FEBRERO 2017**

**ACTA DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN POR LA MODALIDAD DE PRESENTACION  
Y SUSTENTACION DE UNA TESIS**

En la ciudad de Huánuco, siendo las 9.00 horas del día 01 del mes de Diciembre del año dos mil diecisiete se reunieron en el sala de audiencias simulada los miembros Ratificados del Jurado Examinador, designados por Resolución N° 184-2017-DCATP-UDH del 20 de noviembre de 2017, al amparo de la nueva Ley Universitaria N° 30220 inc "n" del Art. 44 del Estatuto de la Universidad de Huánuco, Reglamento de Grados y Títulos, para proceder por la modalidad de Presentación y Sustentación de una Tesis de la Graduada **Lucy Marysol SOTO PERALTA** el postulante al Título de Abogado, procedió a la exposición de la Tesis, absolviendo las interrogantes que le fueron formuladas por los miembros designados del Jurado, de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias; realizado el exposición, el Jurado procedió a la calificación.

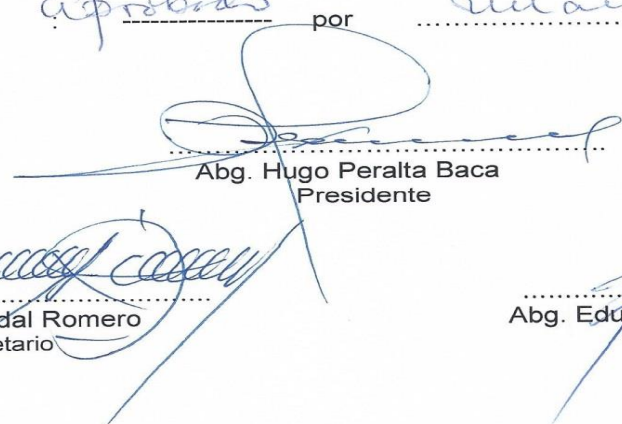
**JURADOS CALIFICADORES**


**PUNTAJE**

Abg. Hugo Peralta Baca	Presidente	<u>12</u>
Abg. Hugo Vidal Romero	Secretario	<u>12</u>
Abg. Eduardo Lavado Iglesias	Vocal	<u>12</u>

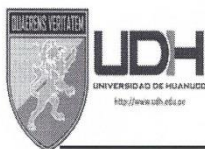
CALIFICATIVO : 12 Doce  
En números En letras

RESULTADO : Aprobado por unanimidad

  
Abg. Hugo Peralta Baca  
Presidente

  
Abg. Hugo Vidal Romero  
Secretario

  
Abg. Eduardo Lavado Iglesias  
Vocal



**UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**  
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



**RESOLUCIÓN N° 184-2017-DCATP-UDH**  
**Huánuco, 20 de noviembre de 2017**

Visto la Resolución N° 162-2017-DCATP-UDH de fecha 24 de octubre de 2017 que declara **APROBAR** el Proyecto de Investigación intitulado **"INAPLICANCIA DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN LOS DELITOS COMETIDOS EN LAS ZONAS ANDINAS"**, presentado por el Bachiller **Lucy Marysol SOTO PERALTA**;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Art. 12° del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas vigente para el caso determina las diversas modalidades al cual el Graduando puede acogerse para obtener el Título Profesional de Abogado.

*Que, mediante Resolución N°:587-2015-R-CU-UDH de fecha 29 de mayo de año 2015 se aprobó el ciclo se Asesoramiento para la tesis profesional- CATP/DERECHO del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, en atención al Art. 31 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH;*

Que, mediante oficio de fecha 11 de noviembre de 2017, el Mg. Felix Ponce e Ingunza Asesor del Proyecto de Investigación **"INAPLICANCIA DE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN LOS DELITOS COMETIDOS EN LAS ZONAS ANDINAS"**, *aprueba el informe final de la Investigación;*

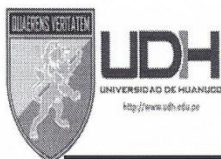
*Que, en cumplimiento al Art. 31 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y CC.PP vigente para el caso y a mérito del documento de visto y habiendo el Bachiller previamente presentado los tres ejemplares de la referida Tesis debidamente espiralados, es pertinente emitir la Resolución de Jurado y señalar fecha y hora para su Sustentación;*

Estando a lo dispuesto en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; Reglamento de Grados y Títulos aprobado con Resolución N° 316-2013-R-CU-UDH del 25 de abril de 2013 y la facultad contemplada en la Res. N° 571-2013-R-UDH;

**SE RESUELVE:**

**Artículo Primero.**- **DESIGNAR** al Jurado Calificador para examinar al Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, Bachiller **Lucy Marysol SOTO PERALTA**, para obtener el Título Profesional de **ABOGADO** por la modalidad de ciclo se Asesoramiento para la tesis profesional; a los siguientes docentes:

Abg. Hugo Peralta Baca	: Presidente
Abg. Hugo Vidal Romero	: Secretario
Abg. Eduardo Lavado Iglesias	: Vocal



**UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO**  
**FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS**  
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



**RESOLUCIÓN N° 184-2017-DCATP-UDH**  
**Huánuco, 20 de noviembre de 2017**

**Artículo Segundo.-** Señalar el día viernes 01 de diciembre de 2017 a horas 09:00 a.m. dicha Sustentación, en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad universitaria La Esperanza.

Regístrese, comuníquese y archívese



**DISTRIBUCIÓN:** Vice. Rect. Académico, Fac. Derecho, Of. Mat. Y Reg. Acad..f. Exp. Interesado, archivo

## **DEDICATORIA**

A mis padres y hermanos

## **AGRADECIMIENTO**

- A Dios por ser mi fuerza.
- A mis colegas por su paciencia al momento de realizar las encuestas pertinentes.
- Al Dr. Felix Ponce e Ingunza por el apoyo incondicional en la siguiente investigación.
- Finalmente, queremos agradecer a las autoridades de la Universidad de Huánuco, que nos han albergado todo este tiempo en sus magnas aulas y por haber impartido los conocimientos necesarios para la realización de esta Tesis.

La Investigadora

## **RESUMEN**

Dentro de las esferas de competencia y las delimitaciones de las zonas alto andinas se puede apreciar ciertos criterios para poder delimitar una responsabilidad penal en diversos delitos, no cabe duda que la investigación que se realizará versara sobre los delitos comunes que son cometidos en las zonas andinas, cabe precisar que los ámbitos de competencia versaran sobre los delitos de violación sexual, delitos de violencia familiar, ellos a raíz de cuáles son los criterios para que una persona responda por un delito común o un delito especial.

Asimismo la investigación tiene como consecuencia la aplicación de un instrumento procesal que a la fecha no se viene utilizando por parte de los abogados, el cual sería la Cuestión Prejudicial, no cabe duda que en la esfera de competencia la Cuestión Prejudicial, es la institución por la cual se requiere de un pronunciamiento en una vía extra – penal, el problema versa que en zonas alto andinas muchas veces los aparentes delitos nacen de la integración de la costumbre, los cuales por sus mismas característica no se configuraría delito.

Sin embargo en el marco de las diligencias preliminares se vulnera claramente diversos derechos y consecuentemente se formaliza la investigación, en ese extremo los abogados no realizan un adecuado medio de defensa como la cuestión prejudicial, ello debido a diversos factores que se denotaron en la presente investigación.

La presente investigación tendrá como origen el ámbito de competencia las zonas alto andinas, la demarcación para orientar las zonas alto andinas versara en el marco de los criterios objetivos para rectificar el marco de la responsabilidad penal y la aplicación de la cuestión prejudicial.

## **SUMMARY**

Within the areas of competence and the delimitations of the highlands can be seen certain criteria in order to be able to delimit a criminal responsibility in various crimes. There is no doubt that the research to be carried out on the common crimes that are committed in Andean areas, it should be noted that the fields of competence on the crimes of rape, crimes of domestic violence. They as a result of what are the criteria for a person to respond by a common crime, or a crime special.

Also the research has as a consequence the application of a procedural instrument that has not been used by lawyers.

There is no doubt that in the field of competition the question referred for a preliminary ruling, is the institution which requires a pronouncement in an extra - criminal, the problem is that in high Andean areas many times the apparent crimes are born from the integration of the custom, which by their very feature is not constituted a crime.

However, in the framework of the preliminary proceedings was clearly violates various rights and consequently is formalized research, on that end the lawyers did not perform an adequate means of defense as the question referred for a preliminary ruling, this due to various factors that re denotaran in the present investigation.

The present investigation shall be the purview of the high Andean areas, the demarcation to guide high Andean areas will focus within the framework of the objective criteria to rectify and framework of criminal responsibility and the implementation of the reference for a preliminary ruling.



## **INTRODUCCION**

Dentro de las esferas de competencia y las delimitaciones de las zonas alto andinas se puede apreciar ciertos criterios para poder delimitar una responsabilidad penal en diversos delitos, no cabe duda que la investigación que se realizará versara sobre los delitos comunes que son cometidos en las zonas andinas, cabe precisar que los ámbitos de competencia versaran sobre los delitos de violación sexual, delitos de violencia familiar, ellos a raíz de cuáles son los criterios para que una persona responda por un delito común o un delito especial.

La teoría de cuestión previa es producto fundamentalmente de la doctrina alemana. Este problema de la cuestión previa, llamado también cuestión preliminar o incidental se plantea cuando en presencia de una relación privada internacional la solución de la cuestión principal del caso implica resolver previamente la cuestión incidental: lo cual significa determinar cuál es el derecho aplicable a la misma, pues de la resolución de esta depende cómo se resuelve la cuestión principal, debido a la conexión existente entre ambas. Rigaux cuestiona los términos mismos de cuestión principal y cuestión previa que expresan la subordinación de la segunda cuestión a la primera. Esta dependencia tiene como marco el proceso: la primera cuestión es llamada principal porque constituye el objeto de la demanda originalmente sometida al juez. La lógica y también el transcurso del tiempo piden la inversión de esta relación: la cuestión previa es lógicamente la primera, pues es la que impera sobre la cuestión principal, de la misma forma que la causa precede a sus efectos. Para que un segundo matrimonio sea válido, es preciso que el primero se haya disuelto antes mediante el divorcio. La vocación sucesoria del hijo natural o adoptivo no es más que uno de los numerosos efectos de su filiación.

## **INDICE**

Dedicatoria	2
Agradecimiento	6
Resumen	7
Summary	8
Introducción	9
<b>CAPITURLO I PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN</b>	
1.1. Descripción del Problema	12
1.2. Formulación del Problema	13
1.2.1. Problema General	13
1.2.2. Problemas Específicos	13
1.3. Objetivos	13
1.3.1. Objetivo General	13
1.3.2. Objetivos Específicos	13
1.4. Justificación de la Investigación	13
1.5. Limitaciones de la Investigación	14
1.6. Viabilidad de la Investigación	14
<b>CAPITULO II MARCO TEÓRICO</b>	
2.1. Antecedentes de la Investigación	15
2.2. Bases Teóricas	16
2.3. Definiciones Conceptuales	40
2.4. Hipótesis	50
2.4.1. Hipótesis General	50
2.4.2. Hipótesis Específicas	50
2.5. Variables	50
2.6. Operacionalización de Variables	51

<b>CAPITULO III MATERIALES Y MÉTODOS</b>	
3.1. Método y Diseño	52
3.1.1. Método de la Investigación	52
3.1.2. Diseño de la Investigación	52
3.2. Tipo y Nivel de Investigación	52
3.2.1. Tipo de Investigación	53
3.2.2. Nivel de Investigación	53
3.3. Población y Muestra	53
3.3.1. Población	53
3.3.2. Muestra	53
3.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación	54
<b>CAPITULO IV RESULTADOS</b>	
4.1. Presentación, Análisis e Interpretación	55
4.2. Análisis de Resultados y Prueba de Hipótesis	55
<b>CAPITULO V DISCUSIÓN DE RESULTADOS</b>	
5.1 Contrastación y validez de hipótesis	66
<b>CONCLUSIONES</b>	68
<b>RECOMENDACIONES</b>	69
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	70
<b>ANEXOS</b>	73

## **CAPITULO I**

### **PROBLEMA DE INVESTIGACION**

#### **1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA**

La cuestión prejudicial un acto previo al proceso penal necesario para que se pueda recurrir al órgano jurisdiccional, es decir antes de seguir un proceso penal se tiene que solucionar un problema que mayor mente son en vía administrativa para poder continuar con el proceso penal y mientras el proceso administrativo no se solucione el proceso penal tiene suspenderse.

En la zonas andinas se puede observar el poco conocimiento sobre la cuestio prejudicial y aunque debería de solucionarse primero en la vía administrativa se continua con el proceso penal, ya que una cuestión prejudicial declarada fundada, no pone fin al proceso, sino que solamente lo suspende hasta que en la vía extra-penal se emita resolución firme, de la cual dependerá si el hecho denunciado constituye delito o

no; y por ende, si el proceso penal debe continuar o no. Si el hecho denunciado constituye delito, el proceso penal continuará a partir del último acto procesal realizado al momento de interpuesta la cuestión prejudicial así mismo sabemos que una cuestión prejudicial favorece a todos los implicados en el hecho.

Un delito en la que se puede dar la cuestión prejudicial es el delito de bigamia o matrimonio ilegal, cuando es necesario recurrir a la vía civil para determinar la validez legal del primer matrimonio que como se puede observar en las zonas andinas no se llevan a cabo y solo se juzga en el ámbito penal.

## **1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA**

### **1.2.1. PROBLEMA GENERAL**

¿Cómo afecta la inaplicancia de la cuestión prejudicial en los delitos cometidos en las zonas andinas?

### **1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS**

- a. ¿Qué efectos tiene una cuestión prejudicial en los procesos penales?
- b. ¿Cuáles son los beneficios que se aplique una cuestión prejudicial en los delitos cometidos en las zonas andinas?

## **1.3. OBJETIVOS**

### **1.3.1. OBJETIVO GENERAL**

Determinar cómo afecta la inaplicancia de la cuestión prejudicial en los delitos cometidos en las zonas andinas.

### **1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- a. Determinar qué efectos tiene una cuestión prejudicial en los procesos penales.
- b. Determinar cuáles son los beneficios que se aplique una cuestión prejudicial en los delitos cometidos en las zonas andinas.

## **1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN**

Con La presente investigación se quiere que sin importar la zona geográfica se respete el debido proceso sin afectar de ninguna forma el derecho

de los imputados de llevarse de manera adecuada un proceso ya sea este penal o administrativo y es por ello que se considera que la cuestión prejudicial se debe aplicar en todos los delitos relacionados a este ya que solucionar el conflicto en vía extra-penal se puede evitar que se lleve a cabo un proceso penal o de hallarse responsabilidad continuar con in proceso penal adecuadamente..

### **1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN**

La investigación analiza los aspectos administrativos que se dan cuando hacemos referencia a las vías extra penales pero acepta y no discute que existen otras vías que también pueden ser usadas para invocar una cuestión prejudicial solo que en esta investigación no se tomó en consideración para su realización.

### **1.6. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN**

El presente trabajo de investigación es viable debido a que:

#### **a. Técnica**

Nos permitió contar con técnicas, tácticas, instrumentos, herramientas, métodos, procedimientos, metodología y asesoramiento profesional, para poder enfocar el presente proceso de investigación sobre las variables de estudio

#### **b. Económica**

Nos permitió disponer de los recursos materiales y económicos necesarios, para poder sufragar los egresos y asumir los esfuerzos que demandada el desarrollo de la presente investigación.

#### **c. Personal**

Por las competencias, capacidades y experiencias de la investigación por ser alumno de esta prestigiosa casa superior de estudios y por la experiencia profesional de los docentes de esta Universidad

## **CAPITULO II**

### **MARCO TEORICO**

#### **2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

##### **A NIVEL INTERNACIONAL:**

#### **1. “LA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN DERECHO EUROPEO: UNA PERSPECTIVA DE PARTE”**

- Escuela Internacional de doctorado, Programa de Doctorado en Derecho.
- Autor: Miguel Ángel Pouget Bastida

Llego a la siguiente conclusión:

- Los mecanismos de resolución de la prejudicialidad de las leyes procesales ordinarias no sirven ni de referente ni de antecedente para el estudio de la prejudicialidad comunitaria. Se ha considerado una cierta excepción el reenvío prejudicial del Conseil d'État francés, que es señalado, junto con la prejudicialidad

constitucional, como un inspirador directo, motivado por el papel fundador de la República francesa en la configuración de las instituciones comunitarias. La aportación francesa más caracterizada en la composición del TJ fue la figura del Abogado general, inicialmente inspirada en la figura del Commissaire du Gouvernement, peculiar del proceso ante el mismo Conseil d'État. El operador jurídico español encontrará que el sistema de devolutividad absoluta del art. 267 TFUE presenta únicamente afinidades con la prejudicialidad constitucional, no con ninguna otra. Los antecedentes normativos directos serían el konkrete Normenkontrollverfahren del art. 100.1 de la Ley Fundamental de Bonn y la questione di legittimità costituzionale del art. 23 de la Ley n. 87 de 11 de marzo de 1953, reguladora del procedimiento concerniente a la Corte Costituzionale. La posición del TJ en relación con las jurisdicciones internas no es la de un TS o de casación, sino que ejerce en líneas generales funciones de jurisdicción constitucional encargada de ser garantía del respeto a los Tratados vigentes.

- La Prejudicialidad Comunitaria como “concepto autónomo” del Derecho comunitario. Para una parte de la doctrina la prejudicialidad comunitaria no debería reputarse en realidad como tal prejudicialidad. BOULOUIS afirma que la pretendida “prejudicialidad” podría admitirse para la cuestión de interpretación,



pero no es apenas reconocible en la cuestión de validez. Para nosotros es palmario que el mejor estudio sistemático de la prejudicialidad europea se realiza desde la prejudicialidad constitucional, institución que es compartida por casi todos los países miembros de la UE. Sin embargo, quede constancia que para el propio TJ parece implícita la calificación como concepto autónomo de la c.p., lo que sin duda supone un límite a ese contraste.

- La noción de órgano jurisdiccional. El concepto de “órgano jurisdiccional” que maneja el TJ es uno de los más polémicos, desde el punto de vista del derecho interno de los estados miembros. El TJ ha dicho reiteradas veces que el concepto de “órgano jurisdiccional” a efectos de lo dispuesto en los Tratados debe reputarse un concepto autónomo del Derecho comunitario, y por tanto no es enjuiciable desde el punto de vista de la dogmática de los Derechos nacionales. De acuerdo con la jurisprudencia del TJ, por “órgano jurisdiccional” se entiende todo órgano que reúna las características de haber sido creado por la Ley, tener carácter permanente y competencia obligatoria; el asunto en cuyo seno se plantee la cuestión debe estar tramitándose en un procedimiento contradictorio en el que se apliquen normas de Derecho. Según estas precisiones en nuestro sistema no cabe duda de que los órganos que integran el poder judicial (incluidas sus salas y

secciones) merecen el calificativo de órganos jurisdiccionales a los efectos del art. 267; lo mismo puede decirse del TC, aun cuando no esté integrado en el Poder Judicial.

- Desde el punto de vista de su utilidad práctica y de la de los particulares, la heterodoxa concepción de órgano jurisdiccional del TJ es muy interesante, dado que la fase administrativa se percibe como una suerte de litigación, impropia si se quiere, pero no muy diferente de la judicial: deben formularse alegaciones jurídicas escritas, puede haber actos presenciales, se proponen y practican pruebas y la resolución siempre es susceptible de recurso. Por tanto, el que el TJ permita a algunos de estos órganos vinculados a la administración pública el planteamiento de la c.p. permite al particular acceder en una fase temprana a un pronunciamiento del más alto nivel, equiparable al de la justicia constitucional o a una casación (en realidad, una mezcla de ambas), que de otro modo llegaría eventualmente sólo después del agotamiento de todas las vías judiciales, y por tanto después de transcurrido un largo lapso de tiempo. La anticipación de esa respuesta puede hacer innecesario que luego el proceso continúe en vía judicial, debido a que el pronunciamiento del TJ es de obligado cumplimiento para el órgano proponente.

## **2. “LA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN DERECHO EUROPEO: UNA PERSPECTIVA DE PARTE”**

- Tesis doctoral por la Universidad RAMON LLULL.
- Autor: Isaac Soca Torres.

Llego a la siguiente conclusión:

- El procedimiento prejudicial establecido en los sucesivos Tratados de las Comunidades Europeas y, posteriormente, de la Unión Europea, para garantizar la interpretación y aplicación uniforme de las normas comunes ha constituido un instrumento esencial en el proceso de integración. El referido procedimiento se concibe como un mecanismo de cooperación que apodera a los juzgados y tribunales estatales para la aplicación de las normas europeas y deja en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la interpretación y enjuiciamiento de las mismas. La jurisprudencia y la doctrina lo han asimilado a un diálogo entre jueces, que se inicia cuando un juzgado o tribunal de un Estado miembro interroga al Tribunal de Justicia de la Unión sobre una materia y éste contesta expresamente a dicha pregunta. La importancia de este diálogo o interacción reside especialmente en el hecho que las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en procedimientos prejudiciales resultan vinculantes no solamente para la instancia judicial que planteó la cuestión, sino también para el resto de órganos jurisdiccionales y demás autoridades públicas de todos los Estados miembros.

- El mecanismo de cooperación prejudicial, que en los Tratados constitutivos se prevé horizontal, bilateral y entre iguales, con preguntas y respuestas recíprocas y responsabilidades compartidas, se ha tornado progresivamente de carácter vertical, multilateral y jerárquico. Ello es así por cuanto el Tribunal de Justicia, en su condición de intérprete del Derecho europeo, ha empleado la cuestión prejudicial no solamente para reforzar los fundamentos de la Unión, sino también para redefinir sus atribuciones. Ha ensanchado sus competencias para situarse en una posición de superioridad frente a los órganos jurisdiccionales estatales, a los que, a su vez, ha ido delimitando sus facultades. La fórmula utilizada por el Tribunal de Justicia para llevar a cabo este cambio de paradigma en el escenario cooperativo ha consistido en determinar unilateralmente en *Isaac Soca Torres* 426 qué términos se establecía el diálogo, esto es de qué forma se podía activar y desarrollar la cuestión prejudicial. Lo ha llevado a cabo a partir de dos líneas aparentemente contrapuestas: endurecer el diálogo, por un lado, y flexibilizarlo, por el otro. Sin embargo, ambas persiguen la misma finalidad.
- El Tribunal de Justicia, en este camino por situarse en la cúspide de conjunto de instancias judiciales europeas, no solamente ha establecido las condiciones en las que debía desarrollarse el diálogo, sino que también ha seleccionado qué entes podían dar

inicio al mismo y recibir una respuesta prejudicial. La imprecisión de los Tratados y del Derecho derivado acerca de la expresión “órgano jurisdiccional de un Estado miembro” autorizado u obligado al planteamiento de cuestiones prejudiciales, sumada a la complejidad y diversidad de realidades institucionales y judiciales de los Estados miembros, ha llevado al Tribunal de Justicia a la creación de un concepto propio de órgano jurisdiccional. Según su jurisprudencia se trata de un concepto autónomo del Derecho europeo, distinto al de los Estados miembros; y unitario, toda vez que no efectúa distinción entre los órganos jurisdiccionales facultados para hacer uso del instrumento de cooperación y aquellos que vienen obligados a plantear cuestiones prejudiciales por no ser sus decisiones susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno. Por lo tanto, se ha arrogado y ha sustraído la facultad estatal de decidir qué entes constituyen órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y si éstos pueden intervenir o no en el diálogo prejudicial.

- El Tribunal de Justicia, pese a referirse constantemente al concepto de órgano jurisdiccional y reconocer que es exclusivo del Derecho de la Unión Europea, nunca ha efectuado su formulación teórica. No ha acometido una definición abstracta y genérica de la noción, posiblemente para evitar que determinadas instancias estatales quedaran privadas del mecanismo prejudicial y, por lo tanto, fuera

de su control y del Derecho de la Unión. Lo que ha hecho, progresivamente, es fijar los criterios que debe Conclusiones 427 cumplir un órgano que pretenda activar el diálogo prejudicial y que podemos sintetizar del siguiente modo: a) El origen legal, esto es que el órgano haya sido creado por una norma estatal y forme parte de la estructura institucional pública del Estado. Su constitución y control no puede quedar sujeto a la voluntad de las partes en litigio. b) El carácter permanente, en el entendimiento que debe tratarse de una instancia establecida para ejercer sus funciones de forma duradera y sin ningún tipo de límite temporal. Así quiere excluirse del diálogo prejudicial a los órganos creados de manera provisional o puntual para la resolución de una disputa específica.

- Estos criterios establecidos por el Tribunal de Justicia para apreciar si una instancia estatal posee la cualidad de jurisdicción facultada u obligada a plantear cuestiones prejudiciales no han recibido un enfoque Isaac Soca Torres 428 uniforme en su jurisprudencia. Su tratamiento tampoco muestra una clara línea evolutiva. Algunos requisitos como el origen legal, el carácter permanente y la aplicación de normas de Derecho han permanecido sin excesivos cambios. Sin embargo, otros, precisamente los más definitorios de un órgano jurisdiccional, han recibido interpretaciones vacilantes y confusas. Así, la obligatoriedad de la jurisdicción, se ha empleado

indistintamente en una y otra vertiente, sin ser aclarado su alcance. La contradicción en el procedimiento se ha dicho que no era un criterio absoluto y, en multitud de ocasiones, se ha prescindido del mismo. La necesaria independencia ha llegado a relativizarse hasta límites impensables en cualquier ordenamiento estatal, por medio de particulares exégesis de las normas relativas a la composición y estatuto personal de los miembros del órgano. Al margen de ello, la definición de la función jurisdiccional por parte del Tribunal de Justicia ha sido totalmente inconsistente.

- La inexistencia de un concepto teórico y abstracto de órgano jurisdiccional y la laxitud interpretativa de los criterios fijados para su identificación ha dado lugar a una jurisprudencia totalmente casuística, en la que es necesario su estudio caso por caso. Del conjunto de asuntos analizados se desprende que el Tribunal de Justicia ha empleado su particular noción de órgano jurisdiccional de dos formas distintas. Por una parte, de forma restrictiva, en el sentido que ha dejado fuera de la misma a determinados juzgados y tribunales del sistema judicial de los Estados, especialmente al entender que no realizaban una función jurisdiccional (efecto del endurecimiento del diálogo). Pero, sobre todo, de forma expansiva, es decir considerando órganos jurisdiccionales a todo tipo de entes, más allá de los que conforman el poder judicial de los Estados miembros, desde instancias administrativas y organismos al

servicio de la administración a tribunales internacionales, pasando por consejos de Estado y tribunales de cuentas (efecto de la flexibilización del diálogo). El Tribunal de Justicia ha querido justificar esta proyección expansiva en la necesidad de proporcionar una respuesta útil a los órganos remitentes de Conclusiones 429 cuestiones prejudiciales, sin la cual no sería posible la aplicación uniforme del Derecho europeo.

## **A NIVEL NACIONAL**

### **1. “LA INAPLICABILIDAD DE OFICIO DE LA CUESTION PREJUDICIAL EN EL PROCESO PENAL PERUANO”**

- Tesis para optar Título Profesional de Abogado en la Universidad Wiener.
- De la Bachiller: BENÍTEZ RIVAS, Eber Arturo.

Llego a la siguiente conclusión:

- En cuanto a su limitación social la investigación ha tenido como finalidad el solucionar el problema o la incógnita del porque la función jurisdiccional del órgano que administra justicia no actúa de oficio en la cuestión prejudicial en el proceso penal peruano. Asimismo, se ha pretendido determinar porque motivos los jueces penales de Lima no resuelven de oficio las cuestiones prejudiciales. En proceso penal peruano, específicamente en la etapa de la cuestión prejudicial los Jueces Penales de Lima no resuelven de oficio ningún acto, razón por la cual nos preocupa este importante laguna, ya que si bien, el juez esta para impartir o administrar justicia, debe de hacerlo aplicando el



principio de iura novit curia, y en cada caso en concreto actuar de oficio para así impartir el derecho debidamente.

## **BASES TEORICAS**

### **1. La omisión propia y omisión impropia**

#### **2.2. Delito de omisión propia**

Los delitos de omisión propia ya contienen un mandato de acción y se castigan por la simple infracción de dicho mandato. Por ello, los delitos de omisión propia son delitos de mera actividad. La omisión propia esta previstamente en la ley. ” (FELIPE VILLAVICENCIO; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 653)

#### **2.3. Delito de omisión impropia**

La omisión no se menciona expresamente en el tipo, el mismo que describe comportamientos activos, pero que, sin embargo, valorativamente resultan equivalentes, por lo que se autoriza su inclusión y su consecuente sanción (FELIPE VILLAVICENCIO; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 654), sin embargo, también es cierto que las normas jurídicas se independizan de sus autores y adquieren una racionalidad propia en función de un desarrollo continuador del Derecho. (PERCY GARCÍA; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 446).

Además se pueden identificar omisiones impropias tipificadas, es decir, expresamente previstas por la ley y en las que el legislador describe explícitamente la omisión del garante al que se le imputa una afectación a una determinado bien jurídico (FELIPE VILLAVICENCIO; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 654).

### **3. Imputación de la omisión propia**

La imputación de un delito es una operación inversa a la del delito de comisión. En el de comisión debe subsumirse la conducta realizada en la descrita por el tipo. En el delito de omisión, la tipicidad se comprueba demostrando que la conducta realizada no se subsume en la descripción de la acción ordenada (FELIPE VILLAVICENCIO; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 656)

#### **3.1. Imputación objetiva**

La imputación de un delito es una operación inversa a la del delito de comisión. En el de comisión debe subsumirse la conducta realizada en la descrita por el tipo. En el delito de omisión, la tipicidad se comprueba demostrando que la conducta realizada no se subsume en la descripción de la acción ordenada (FELIPE VILLAVICENCIO; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 656)

##### **3.1.1. Situación Típica**

Se trata de la que genera el deber de realizar una determinada conducta. Se constituye como el presupuesto de hecho de donde se deriva el deber de actuar una conducta determinada (FELIPE VILLAVICENCIO; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 656)

##### **3.1.2. No realización de la conducta orientada**

En los delitos omisivos siempre hay una conducta ordenada que no realiza el agente frecuentemente esta acción esta típicamente descrita FELIPE VILLAVICENCIO; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 657)

##### **3.1.3. Capacidad para realizar la acción ordenada**

Se trata de un aspecto individual, referido solo al autor concreto en cuanto a su fuerza física particular y a su posibilidad personal de advertir la presencia de la situación típica de poder actuar. Esta capacidad existe incluso cuando el individuo no puede realizar la acción por sí mismo pero puede inducir a otro que lo haga FELIPE VILLAVICENCIO; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 658)

#### **4. Imputación de la omisión impropia**

Sobre la naturaleza de la omisión impropia, en relación al tipo comisivo, existen diversas posiciones: mientras algunos sostienen que comisión y omisión son tipos distintos, otros afirman que en realidad de realización de un injusto omisivo es tan igual como cuando se realiza mediante comisión

#### **6. imputación de la omisión imprudente**

El moderno concepto de culpa o imprudencia se ha simplificado al máximo “La imprudencia se caracteriza como una forma de evitabilidad, en la que el autor carece de un conocimiento actual de lo que se debe evitar en decir que se debe apreciar imprudencia cuando un resultado típico es objetivamente imputable y el autor ha tenido un error sobre el riesgo de producción, a pesar de la posibilidad de conocer el riesgo” (ENRRIQUE BACIGALUPO; DERECHO PENAL PARTE GENERAL Pág. 331)

La culpa es conjuntamente con el dolo las dos únicas formas de culpabilidad y la premisa básica para la existencia de un delito culposo es la lesión efectiva a un bien jurídico, el cual no se quería lesionar es decir producir un resultado sin querer hacerlo; entonces, la culpa es “La falta de previsión de

un resultado típicamente antijurídico, que pudo y debió haberse previsto al obrar”  
(CARLOS FORTAN; DERECHO PENAL, Introducción y Parte General Pág. 331)

#### **4.1.1.1. CLASES DE DOLO O IMPRUDENCIA**

- a. CULPA CONSCIENTE** (culpa con representación), es obrar sin tener en cuenta. Cuando el sujeto si bien no quiere causar resultado advierte la posibilidad de que ocurra, pero confía en que no ocurrirá, es decir “se presenta cuando el sujeto el bien jurídico, el mismo que exigía un cuidado determinado. Tiene consecuencia que le resultado típico de sobrevenir de la creación del peligro por el generada. Es decir, el objeto del conocimiento es la posibilidad de realización típica”. (FELIPE VILLAVICENCIO TERRENOS; Derecho Penal Parte General Pág.404)
- b. CULPA INCONSCIENTE** (culpa sin representación), es obrar sin darse cuenta. No solo se quiere el resultado lesivo. Sino que ni siquiera se prevé su posibilidad no se advierte el peligro, es decir “se presenta se presenta cuando el sujeto no se presentó ni previo el proceso que afecto al bien jurídico que exigía un cuidado especial y que sin embargo, debió preverlo. Aun teniendo los conocimientos que le permitían representarse dicha posibilidad de producción de resultados, no actualiza y, por ende no tiene conciencia de la creación del peligro. Aquí el objeto del conocimiento es la posibilidad del conocimiento de esa realización”

(FELIPE VILLAVICENCIO TERRENOS; Derecho Penal General, Pág. 404).

#### **4.1.1.2. SISTEMAS QUE PRETENDEN EXPLICAR LA IMPRUDENCIA O CULPA**

Los sistemas que pretenden explicar la imprudencia o culpa han sido diversos:

**a. EL SISTEMA CAUSAL:** determina que la culpa tiene un componente psicomental que se encuentra relacionada desde el momento de una determinada infracción delictiva. Para esta teoría el dolo y la culpa son añadidas en la culpabilidad. Asimismo, el nexo causal se basa en la ausencia de resultado, es decir con el descuido de un deber de cuidado. Esta teoría fueron modificando sus elementos, pues señalan a la culpa en dos etapas:

En el injusto (tipo y antijuricidad) analiza la infracción al deber de cuidado objetivo y, en la culpabilidad, comprenderé la previsibilidad subjetiva del hecho en relación al autor.

**b. EL SISTEMA FINALISTA:** Según el sistema finalista, es operador jurídico está delimitado por ciertas estructuras lógico-objetivas las cuales son regulados en su labor de regulación. En tal sentido Welzel, señalo que las estructuras lógico-objetivas relevantes a estos efectos eran la acción humana como acción final y el poder actuar de un modo distinto.

**c. EL SISTEMA FUNCIONALISTA:** Ha planteado una serie de cambios estructurales en la fórmula de los delitos culposos. Así reemplazan el

concepto de la infracción del deber de cuidado por los criterios de imputación objetiva, en especial, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, ROXIN, por su parte señala que el elemento de la infracción del deber de ciudadano no conduce más allá que los criterios generales de imputación. En relación la concepción de la culpa o imprudencia, siguiendo los postulados de LISZT, se le identifica como un supuesto error de tipo. JAKOBS expresa que uno de los casos que no corresponden a la representación de la realidad, o sea, un supuesto de error si es que no se trata más bien de ceguera ante los hechos. Además considera que la imprudencia es aquella forma de evitabilidad que la que falta el conocimiento actual de lo que ha de evitarse. El estado actual de la cuestión se ha cerrado en la moderna teoría de la imputación objetiva.

#### **4.1.1.3. FUNDAMENTOS POLÍTICOS CRIMINALES**

Felipe Villavicencio T. citando a Muños Conde y a García Aran señala que la “la industrialización, la tecnificación y sus influencias en la vida social, en particular la manipulación de máquinas y el tráfico automotor, han originado un incremento de las fuentes de riesgo a los que el ser humano está expuesto, y a su vez han originado el desarrollo de normas de cuidado” (Felipe Villavicencio T. Derecho penal parte especial Pág. 381). Es considerable el número de delitos cometidos a título de imprudencia, principalmente en los accidentes de tránsito, es decir de cierto modo circunstancial al progreso humano basado en el desarrollo técnico e industrial, a partir del cual comenzó a adquirir importancia cuantitativa la

imprudencia punible, dando lugar surgimiento de normas específicas en el orden penal sustantivo procesal.

#### **4.1.1.4. TIPO IMPRUDENTE COMO TIPO ABIERTO**

La variedad de conductas imprudentes, hace imposible describirlas a todas de manera expresa. El delito imprudente es un tipo abierto requiere de una norma de cuidado que permita identificar el correspondiente deber de cuidado y con ello complete o cierre el tipo penal. Pero esta determinación no es absoluta. Corresponde al juez identificar y determinar el contenido de la conducta imprudente prohibida. Por ejemplo el artículo 111 del código penal reprime al agente que por culpa causa muerte de una persona. Aquí la ley no indica característica en la conducta típica tal como acontece con el asesinato o el infanticidio doloso, sino que hace una regulación amplia abierta que debe ser completada por el juzgador en cada caso concreto y limitado la amplitud típica de la afectación del deber de cuidado

#### **4.1.1.5. SISTEMA DE NUMERUS CLAUSUS DEL DELITO IMPRUDENTE**

El código penal de 1991, conserva el sistema franco-germánico o de numerus Clausus para el tratamiento del delito culposo así que el artículo 12 segundo el párrafo del Código Penal señala “el agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos en la ley”, esta técnica legislativa de imputación cerrada de la imprudencia no impide que nuestro ordenamiento jurídico-penal a veces utilice un sistema de imputación

genérica limitada que introduzca una cláusula general de imprudencia o culpa para determinados capítulos de la parte especial o específicos delito. Ejemplo: delitos de contaminación propagación imprudentes (artículo 295) delitos contra los medios de transporte y comunicación y otros servicios públicos por culpa (artículo 282 del código penal) delitos de peligro común por imprudencia (artículo 278 del código penal) JAVIER Villa Stein, citando Mir Puig, señala que “el sistema *numerus clausus* es garantista pues permite con más seguridad jurídica saber en qué casos en el supuesto culposo se trata de una tipificación cerrada y excepcional de la imprudencia” (JAVIER JAVIER VILLA STEIN; Derecho Penal Parte General Pág. 261)

#### **4.1.1.6. IMPUTACIÓN OBJETIVA**

En el tipo culposo a diferencia de lo que sea y la gente dirige su conducta a la meta distinta a la que se realiza en el resultado la conducta imprudente no está descrita en el tipo ello estaría el juez con el motivo de analizar los hechos a partir del resultado lesivo en cada caso y luego de predeterminedar que el resultado es porque cognoscible era en efecto previsible y en consecuencia evitable (JAVIER Villa Stein; Derecho Penal Parte General Pág 363).

“La imputación de los delitos imprudentes utiliza los mismos criterios referidos para los delitos dolosos tanto para la imputación de la conducta como para exportación de resultados. Así pues, la relación a la causalidad creemos que es suficiente con la teoría de la equivalencia de las condiciones.



Además de la relación de causalidad, se requiere de la imputación subjetiva, es decir, que la conducta del sujeto (infracción del deber del ciudadano) debe haber traspasado los límites de riesgo permitido (imputación de la conducta) y dicho riesgo jurídicamente desaprobado debe concretizarse en el resultado en el resultado típico, dentro de los alcances de la norma de cuidado (quería evitar imputación de resultados)” (FELIPE Villavicencio T.; Derecho Penal Parte General Pág. 386). La relación entre estos dos niveles de la imputación está firmada en la doctrina diversas denominaciones durante el desarrollo del derecho penal moderno.

“La base nuclear de la imputación objetiva es la generación de un peligro producto de la infracción del deber objetivo de cuidado, hecho que incrementa la probabilidad de producción de un resultado lesivo a un bien jurídico tutelado”. (ALONSO RAUL, Peña-Cabrera Freyre; Derecho Penal Parte General, Pág 696).

## **A. IMPUTACIÓN DE LA CONDUCTA**

Los tipos imprudentes no ofrecen ninguna información y medida del cuidado que es preciso observar. El derecho penal no puede obligar a nadie más allá de la observancia del cuidado que objetivamente era exigible en el caso concreto al que se encontraba en esta situación, por ello, solo la lesión del deber de cuidado convierte la acción en acción imprudente.

Para determinar el deber de cuidado, se parte de un criterio objetivo, en el sentido de contar con un baremo o medida objetiva, que permitirá al juez

analizar la conducta concreta frente a aquella que hubiere ejecutado un “hombre prudente”. Así, por ejemplo, se pregunta: ¿Cómo se habría comportado en la situación concreta una persona consciente y cuidadosa perteneciente al sector del tráfico del sujeto infractor? Si la situación del sujeto infractor se encuentra dentro del marco de conducta que hubiese ejecutado el hombre prudente (baremo), el deber de cuidado no ha sido violentado; pero si al contrario, dicho infractor sobrepasa los límites de este marco, se puede considerar como imprudente su actuación. Pero no siempre es posible recurrir solo a estos conceptos medios (“hombre prudente”), “ciudadano promedio”, “hombre normal”, “buen conductor”), que pueden resultar imprecisos para determinados casos.

En este sentido, no solo se trata de evaluar la conducta desde el criterio de un hombre diligente en la situación del autor, que puede resultar inexistente e indeterminable, sino también desde la perspectiva de un comportamiento específico del sujeto. Se trata por tanto de una evaluación de la capacidad individual del autor (individualización del criterio de cognoscibilidad). Creemos que no se trata de aceptar la valoración de aspectos psíquicos del autor.

#### **a. FORMAS DE DEBERES DE CUIDADO**

##### **i. DEBER DE CUIDADO INTERNO (DEBER SUBJETIVO DE CUIDADO)**

“Es aquel juicio que recae sobre la capacidad individual: son los conocimientos especiales, deberes

profesionales, etc. tales elementos servirán de barómetro para poder establecer si el autor contaba con poder de evitabilidad, es decir, si ha ovado negligentemente y asimismo si le era exigible” (ALONSO RAUL, Peña Cabrera Freyre; Derecho Penal parte General. Pág. 689).

Para la existencia del tipo imprudente no es suficiente la constatación de un peligro objetivo, sino que es necesario que ese peligro sea cognoscible por el sujeto. La obligación de advertir el peligro para el bien jurídico supone siempre la posibilidad de preverlo, de ahí la relevancia del elemento de la previsibilidad para determinar la infracción del deber de cuidado interno.

## **ii. DEBER DE CUIDADO EXTERNO (DEBER OBJETIVO DE CUIDADO)**

Consiste en la obligación de comportarse conforme a la norma de cuidado, con el objeto de evitar la producción de resultado típico. Javier Villa Stein señala que “tres son las normas que adopta el deber de cuidado externo:

- ✚ Deber de omitir acciones peligrosas. Se trata de evitar acciones que en sí mismas están prohibidas. Incumplen este deber tanto los que afrontan una acción peligrosa sin ninguna preparación (ejemplo: la conducción de un automóvil, en plena vía pública, por parte de un

aprendiz), como aquellos que estando capacitados, sin embargo, dadas las circunstancias, su preparación no alcanza para afrontar el peligro (ejemplo: la conducción de un automóvil, en plena vía pública, por parte del chofer en estado de ebriedad). Es decir, hay comportamientos que de por sí son peligrosos y llevan implícita la infracción del deber de cuidado.

- ✚ Deber de tomar las precauciones del caso e información previa.- Este deber consiste en tener particular cuidado antes de emprender acciones peligrosas, tomando medidas externas, es decir, se exige antes de la ejecución de cualquier tipo de acciones peligrosas. Ejemplo: la verificación del estado técnico antes de que este despegue vuelo; el mantenimiento permanente de las máquinas industriales.
- ✚ Deber de actuar prudentemente en situaciones de riesgo o peligrosas.- Se presenta cuando el individuo se encuentre ante situaciones riesgosas aunque socialmente necesarias, se le exige que actúe prudentemente o incremente el cuidado para evitar sobrepasar el riesgo tolerable” (JAVIER, Villa Stein; Derecho Penal Parte General. Pag. 266).

✚ El deber objetivo de cuidado, aparece recogido en reglas generales de carácter técnico que expresan prohibiciones de conductas para aquellos supuestos en los que la experiencia general de la vida demuestra una gran probabilidad de que una acción de esa índole lesione un bien jurídico. Estas reglas se plasman en leyes, reglamentos, ordenanzas, principios jurisprudenciales, usos y costumbres, pero no coinciden exactamente con el deber objetivo de cuidado, pues aquellas tienen un carácter general meramente individual u orientativo, mientras que el deber objetivo de cuidado ha de determinarse en cada situación concreta, de acuerdo con diferentes factores e interés en juego. Por ello. Puede afirmarse que la inobservancia de la norma de cuidado no conlleva “eo ipso” la realización típica del hecho imprudente, sino que será precisa la concreción del deber objetivo de cuidado a través de una valoración judicial.

Dentro de la temática de la imprudencia profesional adquieren notoria relevancia las reglas técnicas que se imponen jurídicamente para algunas actividades profesionales.

Así, en el sector del tráfico automovilístico concurre una legislación pormenorizada sobre el cuidado que ha

de aplicarse en circulación de vehículos de motor, como es el caso de las normas de tránsito, de seguridad industrial o la llamada *lex artis* que obliga ciertos profesionales.

## **B. IMPUTACIÓN DEL RESULTADO**

Es imprescindible el resultado en los delitos culposos. Integra el tipo. Realiza un hecho previsto en el tipo doloso. Es necesario que el resultado lo sea a causa de la infracción del deber de cuidado y que se le pueda imputar objetivamente al autor. Consideramos que no hay diferencias esenciales entre ambos tipos de injusto (doloso e imprudente) para la imputación del resultado. “Entre la acción y el resultado se presenta la relación de causalidad, la que en los delitos culposos gira sobre la teoría de equivalencia de condiciones-toda causa es condición de un resultado-. La producción del resultado se da por la inobservancia del deber objetivo de cuidado, el cual debe poderse imputar objetivamente al mismo”.(LUIS MIGUEL, Bramont-Arias Torres; Derecho Penal, Lecciones de la Parte General, Pág. 110).

No cualquier conducta que viole un deber de cuidado es un delito imprudente, se requiere además un resultado típico previsto en nuestro código penal. Ejemplo. El automovilista que conduce el vehículo contra el sentido del tráfico (imputación de la conducta, será sancionado penalmente, solo si origina un resultado típico (muerte o lesión de un

peatón, artículo 111 o 124, código penal). Generalmente se afirma que el resultado es una condición objetiva de punibilidad.

El resultado ha generado por la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Este riesgo debe de provenir de la acción imprudente del autor. Es decir, de la infracción del deber de cuidado que le será exigible. Aquí, al lado de la causalidad, adquiere un papel importante que la causación del resultado se ubique en la finalidad de protección de la norma de cuidado infringida por el sujeto.

La exigencia del riesgo típico es consecuencia de la infracción de la norma de cuidado, es decir, con la infracción de la norma de cuidado se está creando el riesgo jurídicamente desaprobado. Lo que importa aquí es que el resultado sea imputable al sujeto por el riesgo derivado de la infracción de la norma de cuidado. Así pues, se negará la imputación objetiva del resultado si se ha producido por causas ajenas a la conducta imprudente del autor. “La imputación objetiva se excluye cuando la acción que causalmente ha producido el resultado no supera los límites del riesgo permitido. Ello significa que tales acciones no son típicas” (ENRIQUE, Bacigalupo; Derecho Penal LI Parte General, Pág. 267).

El resultado típico debe encontrarse dentro del ámbito de protección de la norma de cuidado que ha sido infringido. Una conducta imprudente no es imputable objetivamente si de ella se produce un resultado que no tiene nada que ver con la norma de cuidado infringida.

#### **4.1.1.7. IMPUTACIÓN SUBJETIVA**

En la imputación subjetiva imprudente es importante determinar si el peligro causado pudo ser conocido por el sujeto. Para este fin es preciso indagar sobre la cognoscibilidad y la previsibilidad. Conocimiento o cognoscibilidad y previsibilidad son, por tanto, dos perspectivas distintas del deber subjetivo de cuidado como contenido del tipo subjetivo imprudente. Estas dos categorías están estrechamente relacionadas.

El núcleo duro de la imputación subjetiva imprudente se ubica en la cognoscibilidad y se entiende como exigibilidad del conocimiento del peligro que se determina en el caso concreto atendiendo a todas las circunstancias objetivas concurrentes, a los conocimientos actuales y previos del autor y a su capacidad. La cognoscibilidad, así entendida es, precisamente, lo que denominamos previsibilidad individual -deber prever-. Ejemplo: el agente debe prever que es peligroso conducir un automóvil sin revisar el estado de sus frenos.

“En la imputación subjetiva, habrá que incluir a la previsibilidad y la cognoscibilidad como la exigencia que recaía en el autor de realizar una determinada acción o de omitir su realización, deber que se desprende del directivo de conducta plasmado en la norma de cuidado”. (ALONSO RAUL, Peña-Cabrera Freyre; Derecho Penal, Parte General, Pág. 693).

La previsibilidad se tratara tanto desde una perspectiva objetiva se refiere a la posibilidad de previsión de cualquier ciudadano prudente en la producción del resultado típico. El juez va a determinar si hubiera podido



prever un hombre prudente (sujeto ideal), ubicado en la posición de infractor; además, con los conocimientos de este que, si son menores que los del sujeto ideal, no le restan a este su conocimiento y capacidad de previsión normal, pero si son superiores o excepcionales, se suman a los del sujeto ideal, aumentando correlativamente la posibilidad objetiva de previsión. La previsibilidad personal o individual considera las posibilidades concretas del agente en las circunstancias en que actuó en relación a su experiencia y conocimientos especiales. “El fundamento de la punibilidad del delito es el desprecio que el autor demuestra respecto de los bienes jurídicos ajenos, sea que no ha pensado en la lesión que causa o por que supone falsamente que su acción no causara lesión alguna” (ENRIQUE, Bacigalupo; Derecho Penal Parte General, Pág. 327).

Para el juez se trata de una apreciación objetiva, en el caso concreto y sobre el autor específico. En este sentido, se puede diferenciar entre culpa consciente y culpa inconsciente, aunque recientemente se busca superar esta distinción. El código penal peruano no establece diferencias para los efectos de punibilidad.

### **CONCEPTOS SOBRE LA CUESTIÓN PREVIA**

En el ámbito procesal, a fin facilitar el conocimiento de los medios de defensa, se suele dividirlos generalmente, en defensa de forma y de fondo. Las primeras sin atacar lo que es materia de discusión, pretenden enervar la acción, es decir que esta, se diluya o se paralice por alguna exigencia preestablecida por ley. Además, en materia penal debe

observarse el denominado “principio de legalidad” que contiene los supuestos de *lex certa*, *lex scripta* y *ley stricta*, lo cual tiene incidencia directa en el proceso. Entonces teniendo en cuenta las garantías constitucionales, en materia de proceso penal, quien se encuentre sometido a ella, puede, sin restricción alguna, oponerse a la acción, sin cuestionar el tema de fondo, mediante los denominados “mecanismos técnicos de defensa”.

El Código Procesal Penal del 2004 (NCP), siguiendo el antecedente de la codificación del 40, dedica los artículos 4 al 9 a los mecanismos antes citados, dividiéndolos en: a) Cuestión Previa, b) Cuestión Prejudicial (las que son materia de este artículo), y, c) Excepciones, todas ellas deducibles cuando el Ministerio Público haya comunicado al Juez su decisión de continuar la investigación preparatoria. Es decir, antes de la formalización de la investigación, no es posible deducir medio técnico alguno (entiéndase investigación preliminar). Estos mecanismos pueden plantearse por tanto, solo ante el Juez de la Investigación Preparatoria, precisamente porque éste, tiene la posición de garante, vigilando se cumplan con las garantías del debido proceso, habida cuenta que el Fiscal y la defensa en este nuevo esquema, son partes con similares derechos.

El artículo 4 del NCP señala que, la cuestión previa procede cuando el Fiscal decide continuar con la investigación preparatoria, omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Lo “explícito”

es la novedad de la ley respecto a lo señalado en la codificación anterior, y puede (al igual que la cuestión prejudicial) declararse de oficio artículo 7.3 del NCPP-. Entonces, si el requisito de procedibilidad que debemos entenderlo como una formalidad que debe cumplirse necesariamente no aparece satisfecho, puede el imputado o su defensor constituido, plantearlo ante el Juez, buscando que la omisión sea subsanada. En el proceso en general, debemos señalar que existen los denominados presupuestos procesales (capacidad de las partes, competencia del Juez, y cumplimiento de formalidades). Estos, en el caso de la formalización de la investigación preparatoria, necesariamente deben estar satisfechos puesto, que de otra manera nos encontraríamos ante una actuación nula (como por ejemplo comunicar a un Juez no competente la decisión de formalizar investigación preparatoria). Estando a lo señalado por la norma procesal, nos referiremos en primer lugar a lo que se entiende por “requisito de procedibilidad”. Esta no es otra cosa que el cumplimiento de ciertas condiciones legales para promover acción legal contra el responsable de un determinado hecho punible. Siguiendo a San Martín Castro “se trata de causas que condicionan el ejercicio de la acción penal y sin cuya presencia no es posible promoverla”. Debemos señalar que siendo la acción penal pública, se inicia mediante la denuncia (comunicación de la noticia criminal) y así lo precisa el artículo 326 del NCPP. La denuncia que puede ser efectuada por cualquier persona o funcionario obligado a hacerlo, contiene por lo

menos: a) la imputación (que se efectúa cuando el delito es perseguible de oficio o a petición de víctima y es efectuado por el Ministerio Público), y b) la querella (acto potestativo de la víctima cuando el hecho punible no es perseguible de oficio). Estos evidentemente son requisitos esenciales para el inicio de la acción y algunas codificaciones como la mexicana la entienden como requisitos de procedibilidad. Sin embargo, como reiteramos, la codificación del 2004, con variantes, siguiendo el antecedente de la norma procesal penal del 91 (que no entró en vigencia) señala que la cuestión previa procede cuando se omite un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Este último detalle es el que debemos resaltar, puesto que si existiera omisión de un requisito que no se encuentra previsto en la norma, mal puede argumentarse cuestión previa. En el caso de la cuestión previa, de ampararse la misma, es obvio que el proceso penal no puede iniciarse en forma válida, y, acorde a lo contemplado en el artículo 4 del NCPP, debe anularse todo lo actuado y retrotraerse el estado de cosas, al de antes de efectuarse la formalización de la investigación. De acuerdo a la doctrina, podemos decir que son requisitos de procedibilidad:

a) La legitimidad procesal: Es obvio que la Constitución Política del Estado y su Ley Orgánica, reconocen al Ministerio Público la titularidad de la acción penal la que ejerce de oficio o a instancia del agraviado – ejemplo, el propietario de un inmueble usurpado que formula denuncia - o

por acción popular (artículo 1.1 del NCPP). Sin embargo, existen casos en los que se requiere obligatoriamente la previa instancia del titular del bien jurídico afectado - los denominados delitos semi públicos, defraudación tributaria por ejemplo -, condicionándose la intervención del Ministerio Público, quien sin embargo podrá solicitar la autorización correspondiente (artículo 1.3). Por otro lado en los delitos de persecución privada (ejemplo injuria, calumnia, difamación), es el directamente ofendido quien acciona – mediante la querella - ante el órgano jurisdiccional (artículo 1.2). Por tanto la legitimidad procesal resulta un condicionante para promover la acción penal. Si no se cumplen los supuestos taxativamente señalados en la norma procesal, lo actuado deviene en nulo.

Los Requisitos de Función: estos están referidos principalmente a la existencia de procedimientos previos, en razón a las calidades personales del imputado. Este es el caso de quienes gozan de prerrogativas constitucionales artículo 99 de la Constitución. El denominado antejuicio, que es la formación de causa por delitos funcionales o no funcionales, reservado a los altos funcionarios del estado que gozan de ciertas preeminencias, constituye un paso previo para el inicio de la acción penal y la ley procesal se encuentra obligada a respetarla. Caso aparte es lo relacionado a los Jueces y Fiscales que no tienen la calidad de Supremos, habiéndose establecido que para su procesamiento se requiere de un pronunciamiento del órgano de gobierno del Ministerio Público.

Los Requisitos formales: están referidos a la existencia de ciertas condiciones previas a la investigación. En nuestro ordenamiento penal, existen determinados delitos en los cuales la simple denuncia no es suficiente para el inicio de la investigación y menos para formalizarla, requiriéndose pronunciamiento previo de autoridad competente sobre el objeto del proceso la investigación. Sin esta actividad, cualquier acto de investigación es inválido. Este es el caso de los delitos contra la ecología artículo 304 del Código Penal - , el cual conforme a lo precisado por la Ley 26631 requiere opinión fundamentada y por escrito de la autoridad pertinente, respecto a si se ha infringido la legislación ambiental. De igual manera debe procederse en los casos de atentados contra la propiedad intelectual.

La consecuencia del amparo de la cuestión previa es la nulidad de lo actuado, sin embargo ello no impide reiniciarla luego que se haya satisfecho la omisión. Por tanto, debemos concluir que la cuestión previa no concluye definitivamente la investigación sino que solo la suspende hasta la satisfacción de lo omitido. Por otra parte, existiendo varios imputados, siendo la anulación de lo actuado la consecuencia del amparo de la cuestión previa, esta debe beneficiar a todos los imputados que se encuentren en la misma situación (artículo 8.6 del NCPP).

El artículo 5 del NCPP delimita los alcances de la denominada “cuestión prejudicial” señalando que ella procede cuando el Fiscal decide continuar con la investigación pese a que fuere necesaria en vía extra penal una

declaración vinculada al carácter delictuoso del hecho incriminado. El texto no difiere mucho de lo señalado en el artículo 4 - segundo párrafo – del Código de 1940 (en tanto este señala que “las cuestiones prejudiciales proceden cuando deba establecerse en otra vía el carácter delictuoso del hecho imputado” y, si se aparta sustancialmente de lo señalado en el artículo 6 del Código Procesal Penal de 1991 (referido a que en vía extra penal deba determinarse la existencia de elementos constitutivos del delito).

Vicenzo Manzini señala que prejudicial “es toda cuestión jurídica cuya resolución constituye un presupuesto para la decisión de la controversia principalmente sometida a juicio”. La cuestión prejudicial, tal y como lo plantea la norma procesal, es por tanto, el primer elemento a resolverse para la prosecución de la investigación, a diferencia de la cuestión previa que busca impedir el inicio del proceso penal. Gómez Orbaneja señala que “para que exista una cuestión prejudicial en el proceso penal, se requiere de una materia distinta de la penal y antecedente de ella, que por si sola pudiese formar el objeto de una declaración jurisdiccional”. Por ello, consideramos que para el amparo de la cuestión prejudicial, la vía extra penal, debe ser anterior al proceso penal (preexistir), pues de lo contrario estaríamos ante la creación de vías para la impunidad (búsqueda de la prescripción por ejemplo), aun cuando la Codificación del 2004 en su artículo 5.3, da un plazo a quien se encuentre legitimado para hacerlo 30 días para promover la vía extra penal, caso contrario el Fiscal

Provincial en lo Civil deberá promoverlo e incluso sustituirse cuando el titular de la acción no lo prosigue.

Cuáles serían las vías extrapenales a que hace referencia la norma procesal que puedan efectuar una declaración de ilicitud de un hecho. Definitivamente la primera es la vía civil, por ejemplo el cuestionamiento de la posesión en un interdicto de retener en un proceso civil, relacionado con el delito de usurpación o, el cuestionamiento de la autenticidad de una firma en un documento cuya discusión se encuentra en vía civil, respecto al delito de falsificación de documentos, que requerirá necesariamente de un pronunciamiento previo de este órgano jurisdiccional sobre el carácter delictivo del hecho, para lo cual debe suspenderse el proceso penal. La segunda, la vía administrativa, es discutible. Como bien señala César San Martín Castro, en el Perú la Ley Orgánica del Poder Judicial – artículo 13 - dispone que cuando en un procedimiento administrativo surja una cuestión contenciosa que requiera pronunciamiento previo, se suspende el trámite administrativo hasta que el Poder Judicial declare el derecho que defina el litigio, de igual manera lo contempla el artículo 10 del NCPP. Más aún, el artículo 64.1 de la Ley 27444 señala que la autoridad administrativa podrá inhibirse cuando exista identidad de sujetos, hechos y fundamentos entre lo que se discute en la vía administrativa y lo que se viene tramitando en sede jurisdiccional, siendo lo más probable que se produzca dicha inhibición. Aparte de ello, conforme lo se ha señalado el Tribunal Constitucional lo resuelto en un proceso administrativo



disciplinario es independiente al proceso penal, pues el primero tiene como objeto el sancionar una conducta funcional, tipificada como falta de carácter administrativo y por ende no cabe la cuestión prejudicial. Creemos, que la vía administrativa no puede efectuar una declaración como lo exige el Código Procesal Penal y por tanto la denominada vía extra penal quedaría reducida solo a la vía civil.

Al margen de ello, la vía extra penal podría también comprender al fuero militar. No debe olvidarse que el Código de Justicia Militar establece determinadas conductas punibles, que podrían entrar en colisión con la justicia común y sobre todo por cuanto acorde con lo señalado en el Código Procesal Penal, lo que sustenta la cuestión prejudicial es la existencia de una declaración respecto al carácter delictuoso para la justicia común del hecho incriminado. Sin embargo, la legislación comparada se ha inclinado a considerar como la vía extra penal por excelencia, a la vía civil.

El efecto del amparo de la cuestión prejudicial es como ya dijimos el suspender la investigación hasta que en vía extra penal recaiga resolución firme y beneficia a todos los imputados que se encuentren en igual situación jurídica, aun cuando no la hayan deducido (artículo 5.2). Eso sí, de lo resuelto en la vía extra penal depende la prosecución o el sobreseimiento definitivo de la causa.

En atención a lo señalado por el artículo 7 del NCPP pueden ser deducidas, a) cuando el Fiscal haya formalizado la investigación

probatoria o al contestar la querella – en la acción privada y debe ser resuelta antes de culminar la etapa intermedia, y, b) en la etapa intermedia cuando se ha formulado acusación, siempre y cuando no hayan sido planteados con anterioridad, exceptuándose cuando se funden en hechos nuevos (artículo 350.1 inciso b). Y como ya señalamos, también pueden ser declarados de oficio.

En cuanto al trámite (artículo 8 del NCPP) la presentación de estos medios de defensa requiere el debido sustento, adjuntando de ser el caso los elementos de convicción correspondiente. Recibida la solicitud el Juez comunicará a las partes la admisión de dicho medio de defensa y citará a audiencia dentro de tercero día, la que se realizará con quienes concurren, con excepción del Fiscal quien deberá concurrir obligatoriamente, pues además debe exhibir el expediente fiscal para su examen por el Juez. Escuchadas las partes comenzando por quien propuso el medio de defensa pudiéndose oír en último término al imputado, el Juez resolverá mediante auto fundamentado, de manera inmediata o en todo caso en el plazo de dos días, pudiendo de ser el caso retener el Expediente Fiscal para mejor resolver. Contra lo resuelto procede recurso de apelación formándose, dentro de quinto día, el cuaderno correspondiente con copias certificadas pertinentes del expediente fiscal, empero, si transcurre el plazo sin haberse adjuntado las copias se elevará lo actuado prescindiendo de ellas. En Sala Superior se

seguirá el trámite establecido por el artículo 420 de la norma procesal para la apelación de autos.

Finalmente si las cuestiones previas o prejudiciales fuesen deducidas en la etapa intermedia, se resolverán conforme a lo señalado en el artículo 352, es decir en la Audiencia Preliminar, oyéndose a quien dedujo el medio de defensa y resolviéndose mediante auto fundamentado en primer lugar. Si no es posible resolver de inmediato, puede diferirse la decisión hasta por 48 horas improrrogables, notificándose a las partes la decisión. En caso de estimarse (ampararse) una excepción o medio de defensa, se dictará en la misma audiencia la decisión que corresponda.

Contra lo resuelto en ambos casos, procede recurso de apelación.

#### **4.1.2. BASE LEGAL DE LA OMISIÓN IMPROPIA**

##### **A. TIPO PENAL**

El Código Procesal Penal del 2004 (NCPP), siguiendo el antecedente de la codificación del 40, dedica los artículos 4 al 9 a los mecanismos antes citados, dividiéndolos en: a) Cuestión Previa, b) Cuestión Prejudicial.

#### **4.2. HIPOTESIS**

##### **4.2.1. HIPOTESIS GENERAL**

La implicancia de la cuestión prejudicial en los delitos cometidos en las zonas andinas

##### **HIPOTESIS ESPECIFICAS**

- a. La delimitación en el marco normativo de la cuestión prejudicial en zonas andinas.
- b. El desconocimiento de los medios de defensa en las zonas alto andinas.
- c. La relevancia de los operadores jurídicos como garantes al momento de interpretar la cuestión prejudicial en las zonas alto andinas.

#### **4.3. VARIABLES**

##### **4.3.1. VARIABLE INDEPENDIENTE**

Factores que inciden en la inaplicación de la cuestión prejudicial.

##### **4.3.2. VARIABLE DEPENDIENTE**

Zonas alto Andinas

##### **4.3.3. VARIABLE INTERVINIENTE**

Perú

#### **4.4. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES**

<b>VARIABLES</b>	<b>DIMENSIONES</b>
<b>INDEPENDIENTE</b> Factores que inciden en la inaplicación de la cuestión prejudicial	Artículo 5° del NCPP.
<b>DEPENDIENTE</b> Zonas alto Andinas	Afectación al debido proceso

### **CAPITULO III**

#### **MATERIALES Y MÉTODOS**

#### **3.1. MÉTODO Y DISEÑO**

##### **3.1.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACION**

En la presente investigación hemos utilizado los siguientes métodos, la misma se relaciona con la naturaleza de la investigación estos son:

##### **3.1.1.1. MÉTODO HISTÓRICO COMPARATIVO**

Nos permitió determinar los fenómenos que ocasionan el accidente de tránsito para establecer la semejanza, porque no todos los accidentes tienen la misma intensidad, sino son diversos

##### **3.1.1.2. MÉTODO DIALECTICO**

Nos permitió el estudio de la doctrina penal relacionados al caso, teniendo en consideración sus puntos contradictorios a través de su desarrollo, el

accidente de tránsito no es nuevo, a mayor desarrollo de la industria motor surge mayores accidentes imposibilitando su control adecuado.

### **3.1.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN**

Se encuadra en el diseño no experimental. Por ser descriptivo explicativo (transeccional) y por ser longitudinal, porque abarco el periodo de estudio correspondiente al 2016 (espacio temporal)

## **3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN**

### **3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION**

#### **3.2.1.1. INVESTIGACION DESCRIPTIVO – CORRELACIONAL:**

Por qué se describió mediante la relación de las variables analizadas en función de la hipótesis de trabajo y se recolecto datos de un grupo de sujetos con el cual se determinó la subsecuente relación entre estos conjuntos de datos

### **3.2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN**

El trabajo de investigación se enmarca dentro del nivel explicativo, porque se explicó mediante la relación de las variables analizadas en función de la hipótesis de trabajo.

## **3.3. POBLACION Y MUESTRA**

### **3.3.1. POBLACION**

La población para el presente trabajo de investigación estuvo constituida por los operadores jurídicos del distrito judicial 2016,

### **3.3.2. DELIMITACION GEOGRAFICA-TEMPORAL Y TEMATICA**

El presente trabajo de investigación se encuentra delimitado bajo las siguientes dimensiones:

#### **A. Dimensión Espacial**

La presente investigación se 30 expedientes donde se aplicaron o no la Cuestión prejudicial.

#### **a. Dimensión Metodológica**

La presente investigación se enmarcara dentro de los fundamentos teóricos, doctrinales y tecnológicos del Derecho Procesal Penal como también en la metodología y procedimiento de la investigación desarrollada

**b. Dimensión Temporal**

La presente investigación abarcara el periodo comprendido del año 2015, con la finalidad de poder caracterizar, describir y explicar las características de las variables del presente estudio.

**3.4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION**

**3.4.1. PARA LA RECOLECCION DE DATOS**

Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio se acudirán al empleo de técnicas de recolección y tratamiento de datos y como instrumentos el cuestionario diseñado por la escala de Likert, y así poder contribuir en el Ordenamiento Jurídico de las Zonas Alto Andinas.

**a. Entrevistas y Encuestas:** La técnica de encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz, las mismas que serán aplicadas a los especialistas y expertos con respecto a los aspectos legales de delitos ocasionados por accidentes de tránsito teniendo en cuenta las variables e indicadores del presente trabajo

**b. Análisis Estadístico:** los que se utilizaran de los datos relacionados a las variables durante el periodo 2016

**3.4.2. PARA LA PRESENTACION DE DATOS**

Los datos obtenidos fueron presentados en cuadros, en tablas estadísticos

**3.4.3. PARA EL ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS**

Para el procesamiento de los datos obtenidos, se empleó la estadística descriptiva y la estadística inferencial, que permitió la tabulación de datos.

**CAPITULO IV**  
**RESULTADOS**

**4.1. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN**

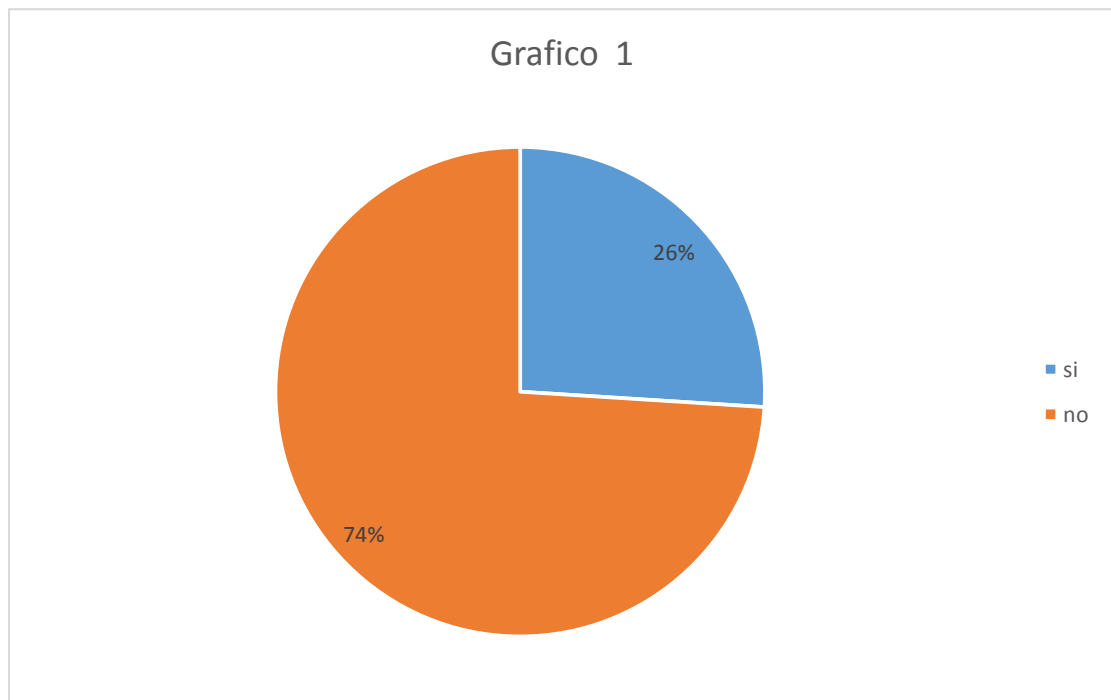
**4.1.1. RESULTADOS DE APLICACIÓN ESTADISTICA DE LOS GRAFICOS DE LA ENCUESTRA PRACTICADOS A LA POBLACIÓN.**

**1. SABE USTED ¿CUÁNDO PROCEDE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL?**

**TABLA N° 01**

	<b>N° de encuestados</b>	<b>Porcentaje</b>
<b>Si</b>	<b>18</b>	<b>26%</b>
<b>no</b>	<b>52</b>	<b>74%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>





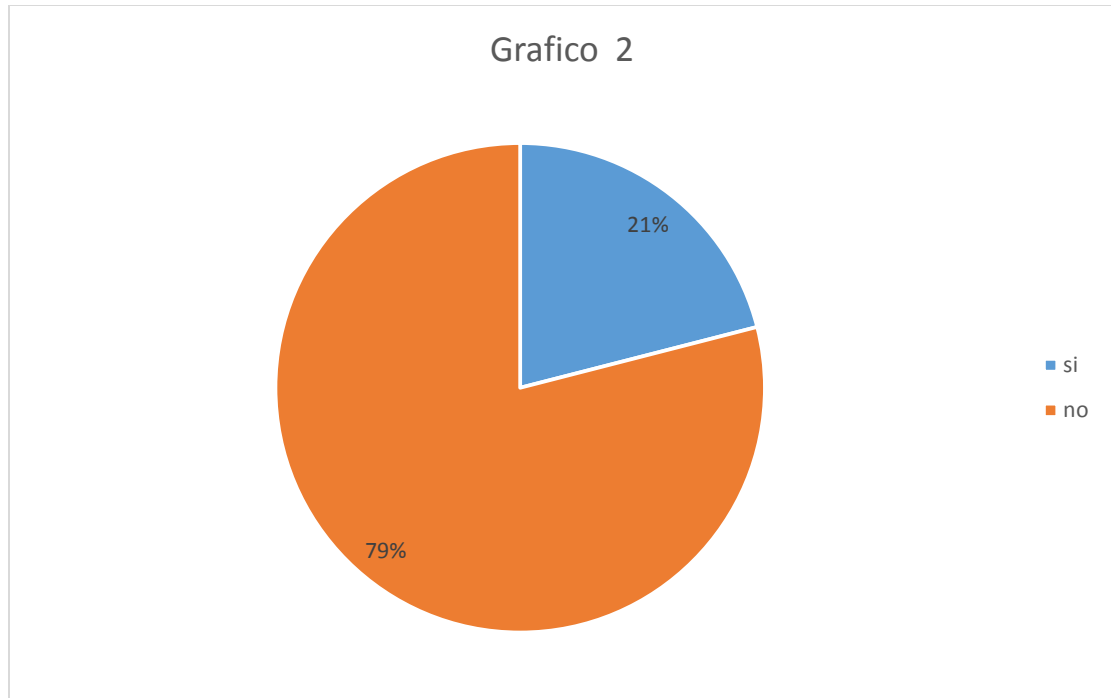
### Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 74% refiere que no, el 26% refiere que sí, sabe cuándo procede la cuestión prejudicial.

## 2. SABE USTED ¿CUÁL ES EL PLAZO DE PARA CONTESTAR LA CUESTIÓN PREJUDICIAL DESPUÉS DE QUE EL JUEZ CORRE TRASLADO A LAS PARTES?

**TABLA N° 02**

	N° de encuestados	porcentaje
<b>Si</b>	<b>15</b>	<b>21%</b>
<b>no</b>	<b>55</b>	<b>79%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>



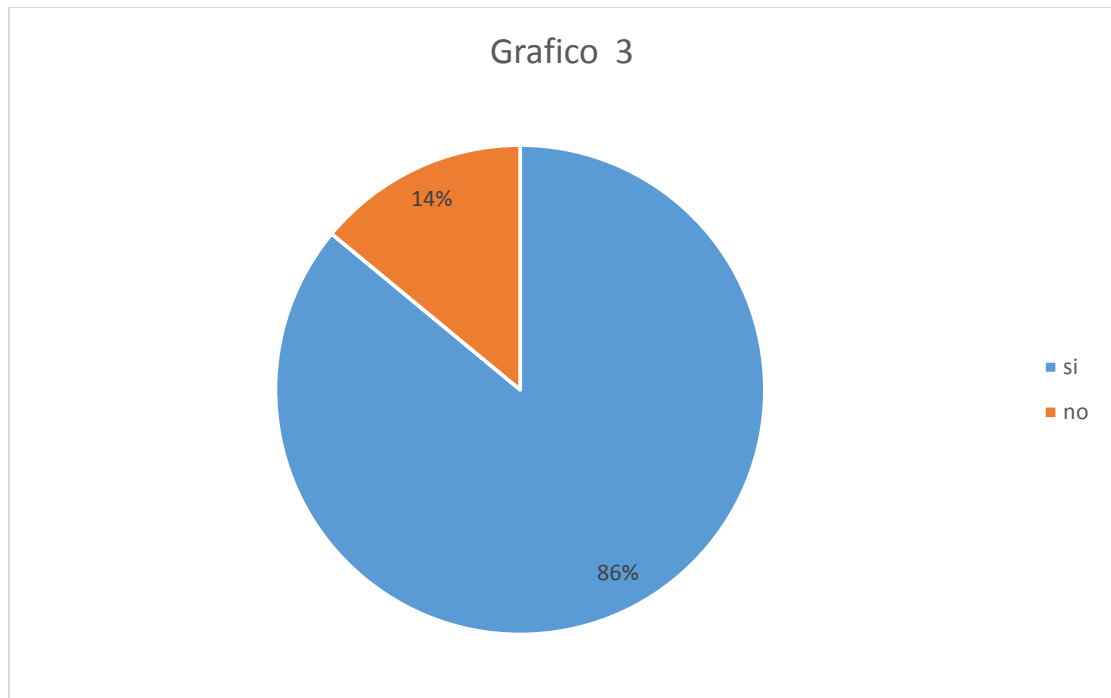
### Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 71% refiere que no, el 19% refiere que no, sabe cuál es el plazo de para contestar la cuestión prejudicial después de que el juez corre traslado a las partes.

### 3. ¿CREE USTED QUE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL GARANTIZA QUE SE LLEVE A CABO UN DEBIDO PROCESO?

**TABLA N° 03**

	N° de encuestados	Porcentaje
<b>Si</b>	<b>60</b>	<b>86%</b>
<b>No</b>	<b>10</b>	<b>14%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>



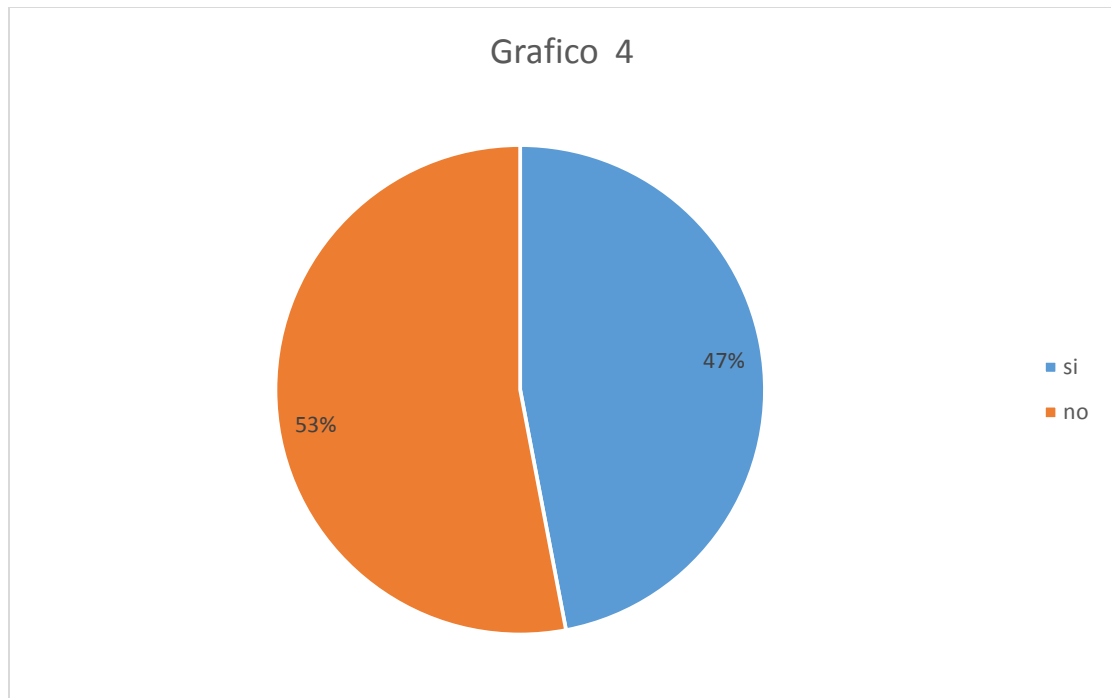
### Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 86% refiere que sí, el 14% refiere que no, si cree que la cuestión prejudicial garantiza que se lleve a cabo un debido proceso.

#### 4. SABÍA USTED ¿QUÉ LA CUESTIÓN PREJUDICIAL NO PONE FIN AL PROCESO, SINO QUE SOLAMENTE LO SUSPENDE HASTA QUE EN LA VÍA EXTRA-PENAL SE EMITA RESOLUCIÓN FIRME?

**TABLA N° 04**

	N° de encuestados	porcentaje
<b>Si</b>	<b>33</b>	<b>47%</b>
<b>No</b>	<b>37</b>	<b>53%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>



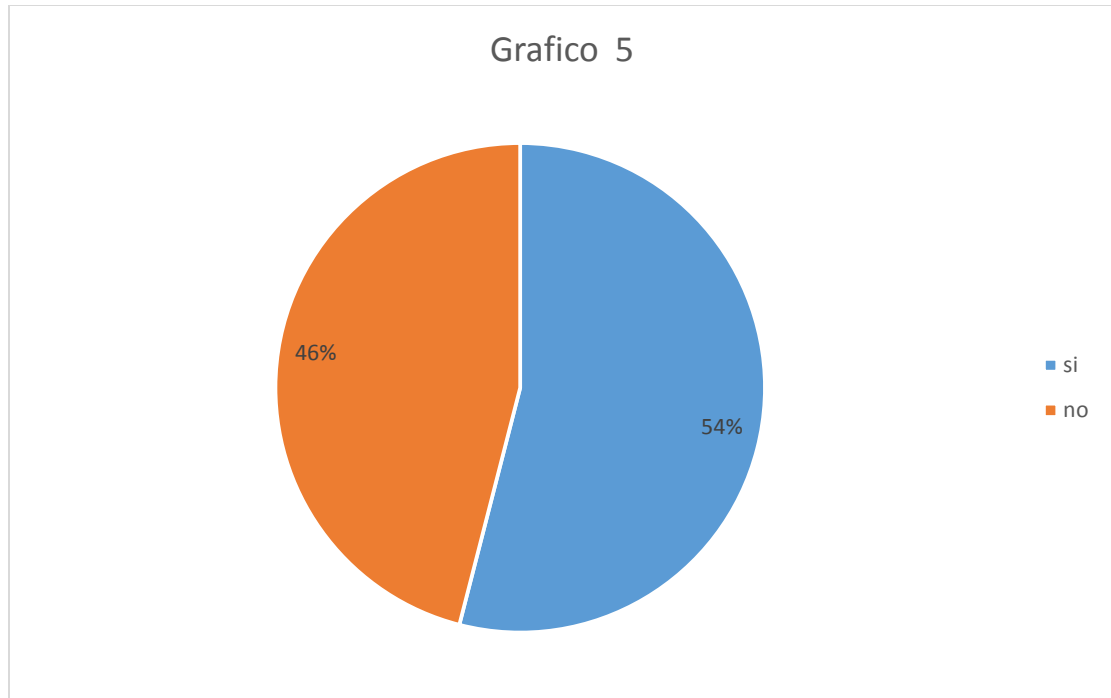
### Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 53% refiere que no, el 47% refiere que sí, sabe que la cuestión prejudicial no pone fin al proceso, sino que solamente lo suspende hasta que en la vía extra-penal se emita resolución firme.

5. **¿CREE USTED QUE DE LA RESOLUCIÓN FIRME EMITIDA EN VIA EXTRA-PENAL DEPENDERÁ SI EL HECHO DENUNCIADO CONSTITUYE DELITO O NO; Y POR ENDE, SI EL PROCESO PENAL DEBE CONTINUAR?**

**TABLA N° 05**

	N° de encuestados	porcentaje
<b>Si</b>	<b>38</b>	<b>54%</b>
<b>no</b>	<b>32</b>	<b>46%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>



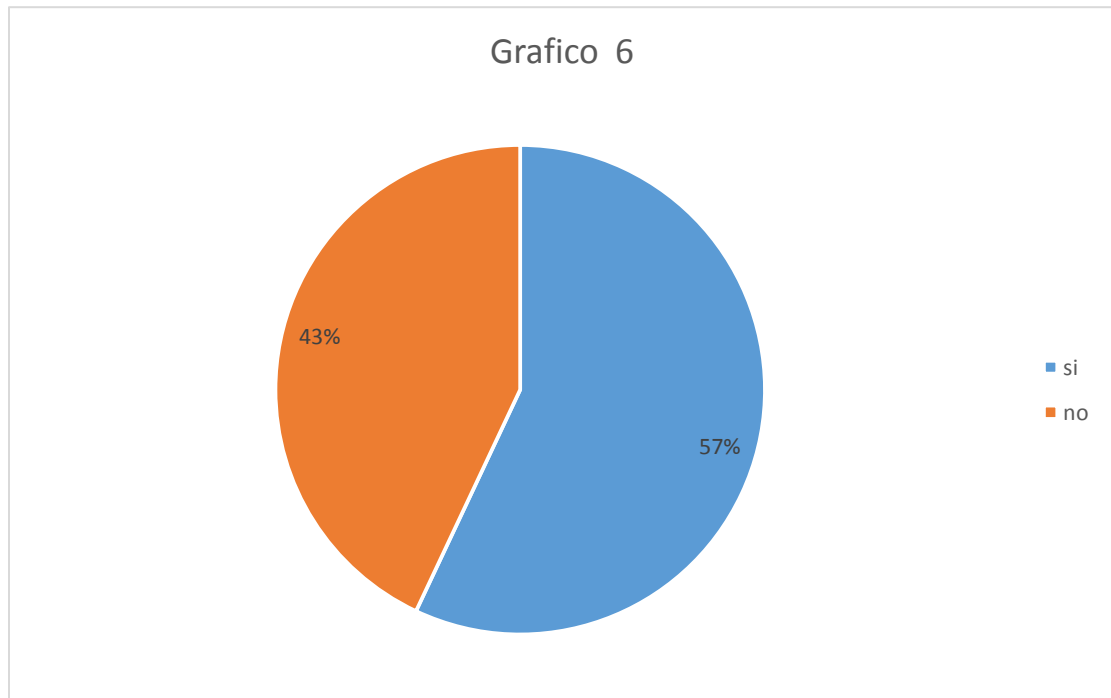
### Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 100 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 54% refiere que sí, el 46% refiere que no, cree que de la resolución firme emitida en vía extra-penal dependerá si el hecho denunciado constituye delito o no; y por ende, si el proceso penal debe continuar.

### 6. SABIA USTED ¿QUÉ LA CUESTIÓN PREJUDICIAL EN FAVOR DE UNO DE LOS PROCESADOS BENEFICIA A LOS DEMÁS, SIEMPRE QUE SE ENCUENTREN EN IGUAL SITUACIÓN JURÍDICA?

**TABLA N° 06**

	N° de encuestados	porcentaje
<b>Si</b>	<b>40</b>	<b>57%</b>
<b>no</b>	<b>30</b>	<b>43%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>



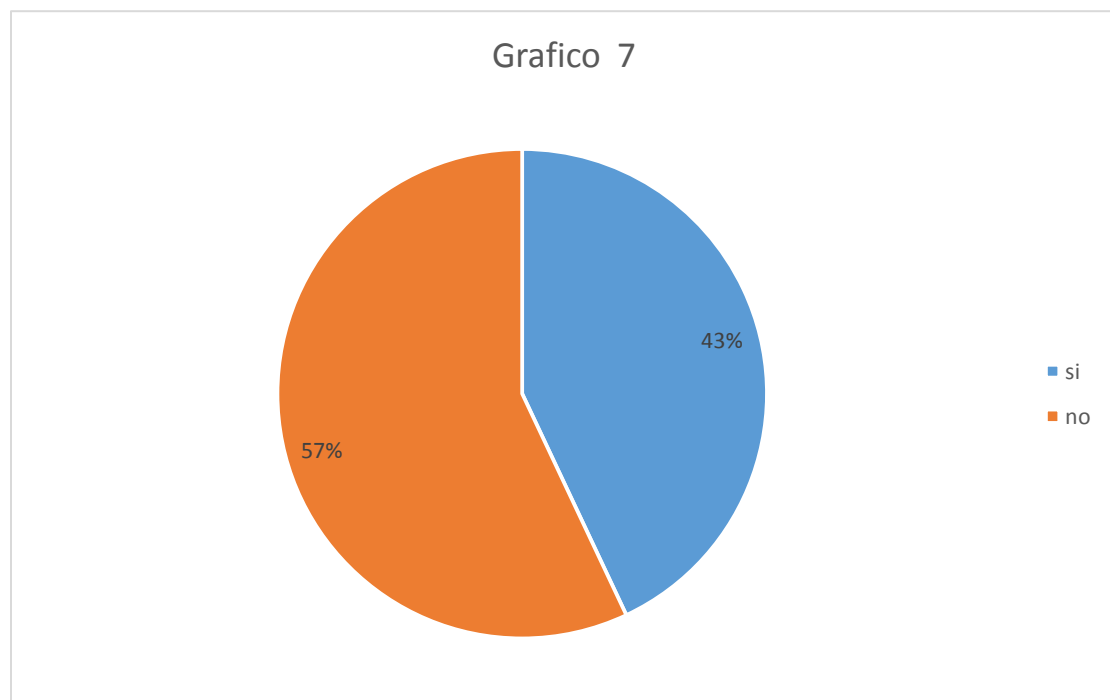
### **Interpretación**

En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 57% refiere que sí, el 43% refiere que no, sabe que la cuestión prejudicial en favor de uno de los procesados beneficia a los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídica.

### **7. ¿CREE USTED QUE LA CUESTIÓN PREJUDICIAL PROCEDE CUANDO SE TRATA SOBRE EL DELITO DE ESTAFA?**

**TABLA N° 07**

	N° de encuestados	Porcentaje
<b>Si</b>	<b>30</b>	<b>43%</b>
<b>No</b>	<b>40</b>	<b>57%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>



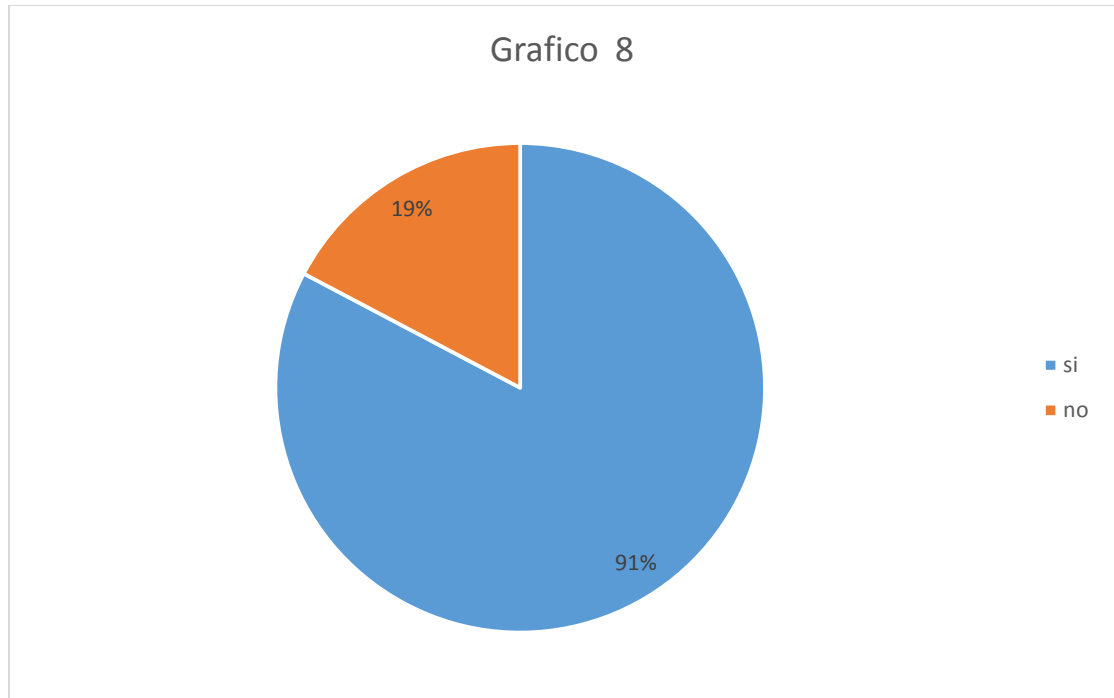
### Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 57% refiere que no, el 43% refiere que sí, cree que la cuestión prejudicial procede cuando se trata sobre el delito de estafa económicamente.

### 8. SABÍA USTED ¿QUÉ LA MAYOR PARTE DE LAS CUESTIONES PREJUDICIALES SON ENVIADAS DE JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA?

**TABLA N° 08**

	N° de encuestados	Porcentaje
<b>Si</b>	<b>45</b>	<b>65%</b>
<b>no</b>	<b>25</b>	<b>35%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>



### Interpretación

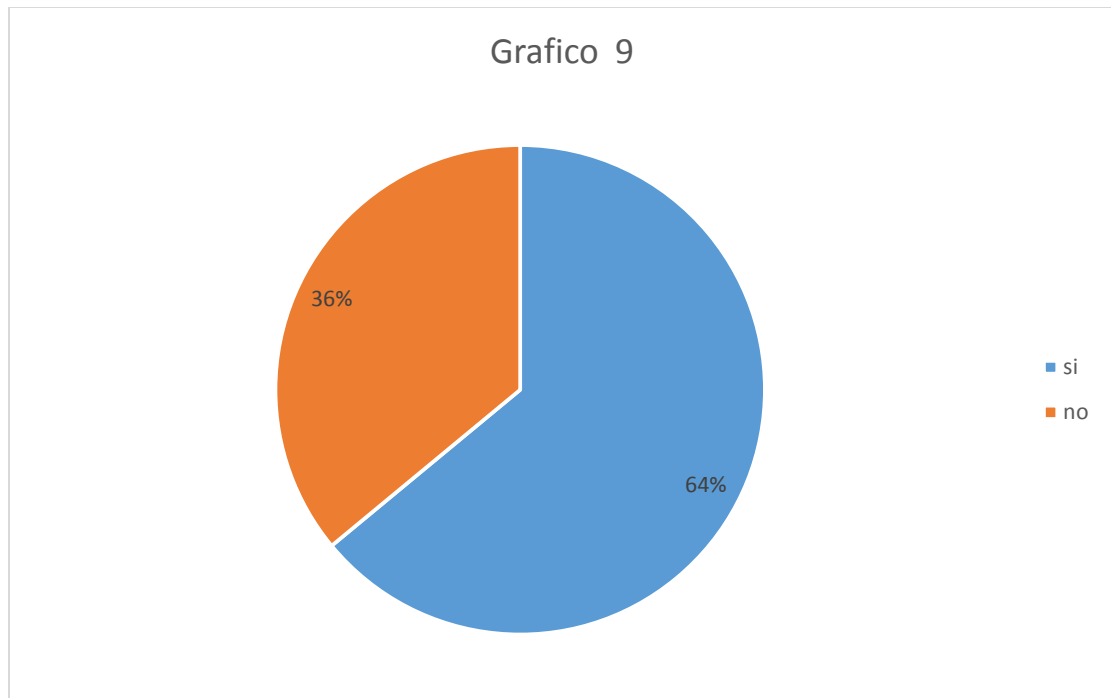
En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 65% refiere que sí, el 35% refiere que no, sabe que la mayor parte de las cuestiones prejudiciales son enviadas de jurisdicción administrativa.

9. **SABÍA USTED ¿QUÉ LAS CUESTIONES PREJUDICIALES SÓLO PODRÁN DEDUCIRSE DESPUÉS DE PRESTADA LA INSTRUCTIVA Y HASTA QUE SE REMITA LA INSTRUCCIÓN AL FISCAL PROVINCIAL PARA DICTAMEN FINAL?**

**TABLA N° 09**

	N° de encuestados	Porcentaje
<b>Si</b>	<b>45</b>	<b>64%</b>
<b>No</b>	<b>25</b>	<b>36%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>





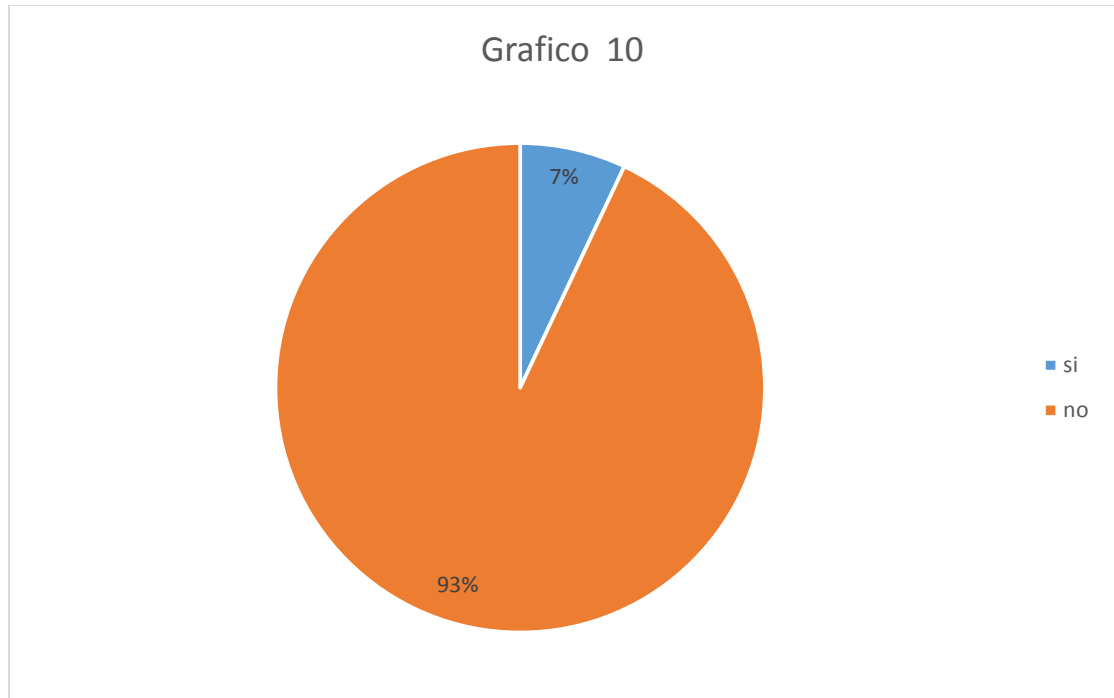
### Interpretación

En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 64% refiere que sí, el 36% refiere que no, sabe qué las cuestiones prejudiciales sólo podrán deducirse después de prestada la instructiva y hasta que se remita la instrucción al Fiscal Provincial para Dictamen Final.

### 10.CREE USTED ¿QUE EL DELITO DE BIGAMIA O MATRIMONIO ILEGAL ES UNO DE LOS CASOS QUE MÁS SE USA LA CUESTIÓN PREJUDICIAL?

**TABLA N° 10**

	N° de encuestados	Porcentaje
<b>Si</b>	<b>5</b>	<b>7%</b>
<b>No</b>	<b>65</b>	<b>93%</b>
<b>Total</b>	<b>70</b>	<b>100%</b>



### **Interpretación**

En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 97% refiere que no, el 7% refiere que sí, cree que el delito de bigamia o matrimonio ilegal es uno de los casos que más se usa la cuestión prejudicial.

## **CAPITULO V**

### **DISCUSIÓN DE RESULTADOS**

#### **5.1. CONTRASTACION Y VALIDEZ DE HIPOTESIS**

Culminada la presente investigación, se pudo contrastar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 74% refiere que no, el 26% refiere que sí, sabe cuándo procede la cuestión prejudicial, el 71% refiere que no, el 19% refiere que no, sabe cuál es el plazo de para contestar la cuestión prejudicial después de que el juez corre traslado a las partes, de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 86% refiere que sí, el 14% refiere que no, si cree que la cuestión prejudicial garantiza que se lleve a cabo un debido proceso. Asimismo, se pudo observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 53% refiere que no, el 47% refiere que sí, sabe qué la cuestión prejudicial no pone fin al proceso, sino que solamente lo suspende hasta que en la vía extra-penal se emita resolución firme, cree que de la resolución firme emitida en vía extra-penal dependerá si el hecho denunciado constituye delito o no; y por ende, si el proceso penal debe continuar, pues se sabe que la cuestión prejudicial en favor de uno de los procesados beneficia a

los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídica , la cuestión prejudicial procede cuando se trata sobre el delito de estafa económicamente.

En el presente grafico se puede observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 65% refiere que sí, el 35% refiere que no, sabe qué la mayor parte de las cuestiones prejudiciales son enviadas de jurisdicción administrativa. Ello debido a que se pudo observar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 64% refiere que sí, el 36% refiere que no, sabe qué las cuestiones prejudiciales sólo podrán deducirse después de prestada la instructiva y hasta que se remita la instrucción al Fiscal Provincial para Dictamen Final. Y por último se validar que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 97% refiere que no, el 7% refiere que sí, cree que el delito de bigamia o matrimonio ilegal es uno de los casos que más se usa la cuestión prejudicial.

## CONCLUSIONES

1. Que el 74% refiere que no, el 26% refiere que sí, sabe cuándo procede la cuestión prejudicial, el 71% refiere que no, el 19% refiere que no, sabe cuál es el plazo de para contestar la cuestión prejudicial después de que el juez corre traslado a las partes.
2. Que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 86% refiere que sí, el 14% refiere que no, si cree que la cuestión prejudicial garantiza que se lleve a cabo un debido proceso.
3. Que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 53% refiere que no, el 47% refiere que sí, sabe qué la cuestión prejudicial no pone fin al proceso, sino que solamente lo suspende hasta que en la vía extra-penal se emita resolución firme, cree que de la resolución firme emitida en vía extra-penal dependerá si el hecho denunciado constituye delito.
4. Que sabe que la cuestión prejudicial en favor de uno de los procesados beneficia a los demás, siempre que se encuentren en igual situación jurídica, la cuestión prejudicial procede cuando se trata sobre el delito de estafa económicamente.
5. Que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 65% refiere que sí, el 35% refiere que no, sabe qué la mayor parte de las cuestiones prejudiciales son enviadas de jurisdicción administrativa.
6. Que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 64% refiere que sí, el 36% refiere que no, sabe qué las cuestiones

prejudiciales sólo podrán deducirse después de prestada la instructiva y hasta que se remita la instrucción al Fiscal Provincial para Dictamen Final.

7. Que de las 70 personas que se aplicó el cuestionario tenemos que el 97% refiere que no, el 7% refiere que sí, cree que el delito de bigamia o matrimonio ilegal es uno de los casos que más se usa la cuestión prejudicial.

## **RECOMENDACIONES**

- 1- Se necesita implementar charlas para dar a conocer los parámetros normativos de la Cuestión Prejudicial.
- 2- Se necesita mayores criterios para la aplicación de los medios de defensa, ello en relación a los artículos 4°, 5° y 6° del NCPP.
- 3- Se requiere implementar un plan de trabajo para los lugares más alejados del Perú, como son las zonas alto andinas.
- 4- Dar a conocer cómo funciona los mecanismos de defensa en el marco del NCPP.
- 5- Delimitar los medios de defensa y las excepciones que propone el Código Procesal Penal.

## BIBLIOGRAFÍA

- AMBOS, kai. Procedimiento Abreviado en el Proceso penal alemán. En: revista Peruana de ciencias penales. N°5, Lima, 1998.
- ANGULO ARANA, Pedro Manuel. El ministerio Público. Orígenes, Principios, Misiones, Funciones y Facultades. Tarea Asociación Grafica Educativa. 2001. Lima-Perú.
- ARAGONESES ALONSO, Pedro. Proceso y derecho procesal. 2° edición., Madrid, 1997.
- ARANGO ESCOBAR, Julio Eduardo. Valoración de la Prueba en el proceso penal. En: Valoración de la prueba. 1°. Ed., Fundación Myrna Mack, Guatemala, 1996.
- ARIAS DUQUE, Juan Carlos. El sistema acusatorio colombiano. Análisis desde su implementación. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Bogotá-Colombia. Primera Edición, 2006.
- ASECIO MELLADO, José María. Introducción al derecho Procesal penal. Tirant Lo Blanch, Valencia 1997.
- BERTOLINO, Pedro. El juez de garantías en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. En: [www.eldial.com/suplementos/penales/edito/edito8.asp](http://www.eldial.com/suplementos/penales/edito/edito8.asp).
- BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El problema de la Prueba Ilícita: un caso de conflicto de derechos una perspectiva constitucional. En: Catedra Discere. Iure et Facto, Año V, N° 8,9, Editorial San Marcos.
- CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Libro de Edición Argentina. Editorial Heliaska SRL. 1981.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. (2004) *Derecho Penal Parte General Tomo I*. Editorial Moreno S.A., 280 pp.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. (2013) *Derecho Penal Parte General*. Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L., 390 pp.
- PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso R. (2013) *Derecho Penal Parte Especial Tomo III*. Editorial Moreno S.A., 320 pp.



- PINEDO SANDOVAL, Carlos A. (2012) *imputación Subjetiva Seis Aportes Fundamentales al Debate Jurídico-Penal Contemporáneo*. ARA Editores E.I.R.L., 456 pp.
- REATEGUI SÁNCHEZ, James, (2014) *Derecho Penal Parte Especial Volumen 1*. Editora y Distribuidora Ediciones Legales E.I.R.L., 562 pp.
- ROJAS VARGAS, Fidel, (2012) *Código Penal Dos décadas de Jurisprudencia*. ARA Editores E.I.R.L., 321 pp.
- SIERRA BRAVO, Restituto, (2001) *Técnicas de Investigación Social*. Editorial Thomson Paraninfo S.A., 230 pp.
- URQUIZO OLAECHEA, José, (2010) *Código Penal Tomo I*. Editorial Moreno S.A., 450 pp.
- VILLAVICENCIO TERREROS, Felipe A., Julio (2006) *Derecho Penal Parte General*. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., 806 pp.
- VILLA STEIN, Javier, Julio (2008) *Derecho Penal Parte General*. Editora y Librería Jurídica Grijley E.I.R.L., 720 pp.

# **ANEXO**